

Valparaíso, dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se ha ordenado instruir sumario en estos autos criminales Rol N° 22-2014 iniciados primeramente ante el Juzgado de Letras de La Ligua y posteriormente seguidos ante este Ministro en Visita Extraordinaria para el conocimiento y juzgamiento de causas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de investigar la existencia de los delitos de secuestro con grave daño causando muerte e inhumación ilegal en la persona de José Renato Lazcano Campos, tipificado en los artículos 141 inciso 3° y 320 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, respectivamente, y establecer las responsabilidades que en su comisión le correspondió a las siguientes personas: 1) Angel Nicanor Bustos Farías, cédula de identidad N° 6,780.986-6, natural de Antofagasta, casado, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en calle Arica sin número, Papudo; 2) Hernán Alejandro Díaz Carreño, cédula de identidad N° 6.359.184-K, natural de Santiago, casado, Subcomisario de Investigaciones, domiciliado en Carlos Díaz N° 176 y La Florida N° 62, San Esteban de Los Andes; 3) Luis Patricio Pantoja Canales, cédula de identidad N° 6.044.280-0, natural de Bulnes, casado, empleado público, auxiliar de consejería de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en Guayanas N° 250, Los Andes; 4) Jorge Eduardo Manríquez Fernández, cédula de identidad N° 5.865.770-0, natural de Gorbea, casado, conductor de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en Avenida Alessandri N° 965, San Esteban de Los Andes; y 5) Pedro Guillermo Leva Denegri, cédula de identidad N° 6,546.906-5, natural de Antofagasta, viudo, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en calle Eyzaguirre N° 737, San Bernardo.

La presente investigación se inició por denuncia que rola a fojas 1, efectuada por Roberto Rozas Aguilera, en su calidad de Fiscal de un sumario administrativo, en la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 1° de julio de 1991.

Por resolución de fojas 267 se somete a proceso a Angel Nicanor Bustos Farías, Hernán Alejandro Díaz Carreño, Luis Patricio Pantoja Canales, Felipe Humberto Hinojosa Sánchez y Fabio Barceló Lira Guzmán, como autores de los delitos de secuestro con grave daño causando muerte e inhumación ilegal en la persona de José Renato Lazcano Campos,

previsto y sancionado en los artículos 141 inciso tercero y 320 del Código Penal, vigente a la época de los hechos. Asimismo, a Jorge Eduardo Manríquez Fernández y Pedro Guillermo Leva Denegri como cómplices de los mismos delitos.

A fojas 349 rola querella deducida por el Subsecretario del Interior en contra de las personas procesadas y en contra de todos quienes resulten responsables, como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de secuestro, con grave daño, cometido en perjuicio de José Renato Lazcano Campos, quien fuera calificado como víctima de violación a los derechos humanos, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

A fojas 383, rola resolución que sobresee definitivamente a Felipe Hinojosa Sánchez, por muerte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 408 N °5 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 490, rola querella deducida por el abogado Francisco Jara Bustos, en representación de doña María Alejandra Lazcano Campos, en contra de las personas procesadas, así como también en contra de todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos cometidos en perjuicio de José Renato Lazcano Campos, ambos en grado de consumados, sancionados a la fecha de los hechos en los artículos 140, 150 y otros del Código Penal.

A fojas 758, se cierra el sumario.

A fojas 760, rola acusación fiscal en contra de los procesados Angel Nicanor Bustos Farías, Hernán Alejandro Díaz Carreño, Luis Patricio Pantoja Canales y Fabio Barceló Lira Guzmán, como autores del delito de secuestro con grave daño causando muerte e inhumación ilegal en la persona de José Renato Lazcano Campos y en contra de Jorge Eduardo Manríquez Fernández y Pedro Guillermo Leva Denegri como cómplices de los mismos delitos.

A fojas 779 y siguientes, el abogado Francisco Jara Bustos, por la parte querellante María Alejandra Lazcano Campos, deduce acusación particular en contra de los

mencionados procesados y en el primer otrosí de ese escrito interpone demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile.

A fojas 810 y siguientes, la abogada Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deduce acusación particular en contra de los mismos procesados.

A fojas 884 y siguientes, rola contestación de la demanda civil del Fisco de Chile.

A fojas 929 y siguientes, 934 y siguientes, 940 y siguientes, 946 y siguientes, 952 y siguientes, 958 y siguientes, el abogado Jorge Balmaceda Morales, en representación de los acusados Hernán Díaz Carreño, Fabio Lira Guzmán, Pedro Leva Denegri, Angel Bustos Farías, Jorge Manríquez Fernández y Luis Pantoja Canales, respectivamente, opone excepción de previo y especial pronunciamiento y, en subsidio, contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares.

A fojas 976, la abogada Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de la Unidad de Programa de derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a fojas 984 el abogado Francisco Jara Bustos, por la parte querellante María Alejandra Lazcano Campos, contestan el traslado otorgado respecto de la excepción de previo y especial pronunciamiento, cuyo fallo quedó para la sentencia definitiva.

A fojas 1009 se recibe la causa a prueba y se rinde la testimonial que rola en autos.

A fojas 1031 se dicta sobreseimiento definitivo respecto al acusado Fabio Barceló Lira Guzmán, por haberse extinguido su responsabilidad penal, por muerte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 408 N° 5 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 1044 se trajeron los autos para efectos de lo dispuesto en el artículo 499 del mismo cuerpo normativo, se decretan medidas para mejor resolver, las que cumplidas, dejan los autos para fallo.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ACREDITACION DEL HECHO PUNIBLE.-

PRIMERO: Que, en orden a acreditar los hechos materia de la acusación judicial ya reseñada, hechos a los que se adhirieron las partes querellantes, se han reunido los siguientes antecedentes y elementos de convicción:

1.- Denuncia formulada a fojas 1, por el Fiscal en sumario administrativo, Roberto Rozas Aguilera, dirigida al Juez del Juzgado del Crimen de La Ligua, de fecha 1° de julio de 1991, la que indica que se pone en conocimiento que mediante Orden N° 71 de fecha 17 de abril de 1991 del Jefe de la Segunda Zona Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, dispuso la realización de un sumario administrativo con el fin de establecer fehacientemente los hechos ocurridos en el año 1983, en la Comisaría Judicial de Los Andes, relacionados al presunto deceso del “delincuente habitual” (SIC) José Renato Lazcano Campos, apodado “Guatón José”. Agrega que de los resultados obtenidos en la encuesta sumarial, este hecho ocurrió en junio de 1983, en circunstancias que esta persona se encontraba detenida en los recintos de los calabozos del cuartel de la Comisaría Judicial de Los Andes y posteriormente fuera inhumada en forma ilegal en un lugar de dunas, ubicado en algún sector comprendido entre el sector norte de La Ligua y el sector norte correspondiente al Puente Los Molles. Indica que por las declaraciones tomadas por la Fiscalía aparecerían involucrados los funcionarios Subcomisario Angel Bustos Farías, de dotación de la Comisaría Judicial El Litoral, el Subcomisario Hernán Díaz Carreño, el conductor de vehículos policiales Jorge Manríquez Hernández, el auxiliar de conserjería Luis Pantoja Canales, de dotación de la Comisaría Judicial de Los Andes. Del mismo modo, asevera que les asistiría responsabilidad al Prefecto Felipe Hinojosa Sánchez y Fabio Lira Guzmán, actualmente jubilados de la institución. Señala que por lo referido, al agotar la investigación y cerrar el sumario administrativo se pone en conocimiento del Tribunal los hechos indicados y que vendrían a constituir el delito tipificado en el artículo 320 del Código Penal. Finalmente hace presente que el sumario administrativo se encuentra en tramitación de cierre.

2.- Declaración de fojas 3, de Roberto Rozas Aguilera, Comisario de la Policía de Investigaciones, quien ratifica la denuncia interpuesta. Señala que a raíz de comentarios, rumores y de anónimos fue detectada una situación irregular ocurrida con la detención del

“delincuente habitual” (SIC) José Renato Lazcano Campos, apodado “Guatón José”; que de la investigación del sumario se logró concluir que el nombrado sujeto fue detenido por la Policía de Investigaciones en junio de 1983 y por circunstancias que no se ha podido determinar el detenido falleció en los calabozos del cuartel de la Comisaría Judicial de Los Andes, hecho presumiblemente ocurrido el día 4 del mes y año referido; que posteriormente y al parecer con el fin de ocultar lo sucedido, el cadáver del detenido fue trasladado en un vehículo policial hasta un sector indeterminado, ubicado entre la ciudad de La Ligua y el sector de Los Molles, por la carretera Panamericana Norte y, en algún sector de este lugar fue inhumado en forma ilegal, en un lugar en que hay dunas; que de las indagaciones que le correspondió practicar es posible concluir responsabilidad de los siguientes funcionarios: Felipe Hinojosa Sánchez, a la fecha de los hechos Comisario de esa unidad, actualmente en retiro como Prefecto, Fabio Lira Guzmán, en la época Subcomisario de la Comisaría de Los Andes, actualmente jubilado como Comisario, Angel Bustos Farías, a la época de los hechos Inspector de la unidad, en la actualidad Subcomisario de dotación de la Comisaría Judicial El Litoral, Hernán Díaz Carreño, a la fecha de los hechos detective, actualmente Subcomisario de la Comisaría de Los Andes, el conductor de vehículos policiales Jorge Manríquez Fernández y el auxiliar de conserjería Luis Pantoja Canales, ambos actualmente de dotación en la Comisaría de Los Andes; que en el sumario administrativo se realizaron las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, habiéndose interrogado al personal involucrado y a todas aquellas personas que pudieron haber aportado antecedentes para la investigación sumarial; que además, se realizaron todas la otras indagaciones que a su juicio eran indispensables para la mayor precisión de los hechos pesquisados como también se tuvo a la vista el proceso por presunta desgracia de José Renato Lazcano Campos, incoado por denuncia de su hermana en el Segundo Juzgado del Crimen de Los Andes, causa Rol 2.706, que se encuentra sobreseída temporalmente. En orden de investigar, a fojas 185, contiene declaración extrajudicial del testigo, señalando que fue nombrado Fiscal en el sumario administrativo a raíz de un anónimo que daba cuenta de la muerte de una persona en un calabozo en la Comisaría Judicial de Los Andes, determinando que en una fecha que no puede precisar, personal de Carabineros de Los Andes, entregó a un detenido en la Comisaría Judicial de Los Andes donde fue recibido por el oficial de guardia, cuyo nombre no recuerda; que un funcionario de Apellido Bustos y de

grado de Inspector, se interesó por dicho detenido, por lo que quedó bajo su responsabilidad al tomar la situación a su cargo; que el detenido no fue ingresado o registrado en los libros respectivos, por lo cual se ignoraba su identidad, no obstante dentro de la investigación se determinó que uno de los funcionarios, el día de los hechos, consultó a dicho detenido en la base de la asesoría técnica de Valparaíso, donde quedó registrada la consulta y el nombre de la persona o detenido y desde ese momento lograron saber la identidad del mismo; que entrevistó al auxiliar de la Comisaría Judicial de los Andes, quien relató que el día de los hechos lo habían citado a la unidad policial en horas de la noche sin decirle los motivos y le ordenaron ayudar a cargar un bulto, que trataba de un cuerpo, y lo subieron a un vehículo, no recuerda si era policial o particular y posteriormente se dirigieron al sector de Los Molles, donde existen unas dunas, haciendo presenten que el auxiliar estaba premunido de una pala que le proporcionaron otros funcionarios que lo acompañaban y ordenaron concurrir, no recordando sus nombres; que luego, llegaron un punto determinado en Los Molles, donde el auxiliar efectuó una fosa, para seguidamente sepultar dicho cadáver. Recuerda que los antecedentes fueron puestos a disposición del Juzgado del Crimen de la Ligua y se instruyó una causa por inhumación ilegal, haciendo presente que se constituyó en el sector de Los Molles pero no hubo resultados positivos sobre el hallazgo del cadáver. A fojas 639 de la causa, declara nuevamente, y señala que en el sumario administrativo no se logró terminar en su gestión, ya que fue ordenado por el Tribunal del Crimen competente que fuera remitido por la gravedad de los hechos, y él a comienzos del año 1992 fue trasladado a la ciudad de Santiago; que en aquel año él era Comisario y Jefe de la Unidad de San Felipe y fue comunicado por el Jefe Zonal que realizara una investigación en relación a unos antecedentes que había recibido de Santiago y que se basaba en un anónimo que le había llegado a un funcionario de Los Andes, el que decía “te va a penar el guatón José” o algo similar, y sobre esta base se ordenó instruir sumario; que no recuerda la causas de fallecimiento de José Lazcano, ya que ese hecho había ocurrido como hace ocho años atrás de que se instruyera el sumario administrativo, además que el cuerpo no apareció, lo que sí es seguro es que habría fallecido en el calabozo, según las declaraciones de los involucrados, tampoco sabe si fue interrogado por el receptor del detenido, a quien no le quedó más remedio que darle cuenta al jefe de la unidad y contarle lo sucedido, también llegó el segundo jefe de la unidad; que según Bustos habría dicho que dieran cuenta a la

Justicia y los otros dijeron que no, ya que era un desprestigio a la institución; y que no pudieron encontrar el lugar donde el cadáver fue sepultado.

3.- Informe de fojas 4 bis, emanado del Jefe de la Comisaría Judicial de Los Andes, con fecha 9 de julio de 1991, al Tribunal, señalando que el libro de ingreso de detenidos de esa unidad correspondiente al año 1983, fue incinerado en su debida oportunidad, ya que dicha documentación tiene una vigencia de permanencia en sus archivos de solo seis meses, dando así cumplimiento a la reglamentación vigente de la Policía de Investigaciones.

4.- Declaración de fojas 53 vuelta, de Miguel Angel Yáñez Yáñez, quien señala que en el año 1988 volvió a la unidad policial de Los Andes, época en que comenzó a reunir antecedentes de “delincuentes habituales” que había conocido anteriormente en Los Andes, percatándose que no ubicaba en el sector a José Lazcano Campos, apodado “Guatón José”; que por indagaciones efectuadas supo que había desaparecido y que existía una denuncia por presunta desgracia en el 2° Juzgado del Crimen de Los Andes; teniendo presente lo anterior y los rumores recibidos en relación a que algo anormal le habría ocurrido a esa persona, conversó con el Subcomisario Enrique Alvarez, actualmente en retiro, quien le expresó que en el año 1983, encontrándose de guardia en la unidad el actual Subcomisario Angel Bustos habría recibido en calidad de detenido a José Lazcano; que conversa con Manríquez, chofer de la unidad y éste le había manifestado que un día sábado del año 1983 se le había ordenado por el jefe de la unidad en ese entonces, Felipe Hinojosa, que condujera un vehículo policial en compañía de los jefes de la unidad y otros funcionarios hasta el sector de Los Vilos donde fue bajado un bulto envuelto en una frazada y luego recibió la orden de regresar más tarde, enterándose después que el bulto correspondía a José Lazcano y que lo habían enterrado para evitar que se supiera de su muerte ocurrida en el cuartel; que de esta situación informó al segundo jefe de la unidad, César Contreras Avello, el que dispuso que siguiera indagando a fin de establecer lo ocurrido; que antes de conversar con el Subcomisario habló con Luis Pantoja, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio de la unidad policial, el que le corroboró lo señalado por Manríquez, agregando que el día en que el “Guatón José” estaba detenido, escuchó gritos provenientes del calabozo y que al concurrir a ese lugar se percató que José Lazcano estaba siendo interrogado por el Inspector Bustos y los Detectives Leva y Catalán, luego llegó el

Inspector Hernán Díaz, quien también se sumó al interrogatorio, además, le indicó que pasado un lapso los funcionarios mencionados comentaban que el “Guatón José” había fallecido; también le contó que al muerto lo habían envuelto en una frazada y lo habían dejado en un calabozo interior, dándole cuenta de lo ocurrido al jefe de la unidad Hinojosa y al segundo jefe, Lira, quienes fueron los que dispusieron la inhumación con el objeto de ocultar el cadáver en un lugar cercano a Los Vilos, agregando que incluso ambos jefes habían ordenado cerrar el cuartel ese día para impedir ingreso de público; que posteriormente trató de conversar con el Inspector Díaz, quien se negó a proporcionar cualquier antecedente; que no pudo continuar con la investigación porque fue llamado a retiro, pero le dio cuenta al actual Subcomisario de Los Andes, señor Inostroza, para que diera cuenta a la superioridad; que decidió continuar por su cuenta la investigación, logrando determinar que José Lazcano había sido detenido por funcionarios de Carabineros en la Quinta de Recreo “El Topón” de Los Andes, y posteriormente entregado a la guardia del cuartel de la Policía de Investigaciones, al entonces Inspector de Guardia Angel Bustos Farías, ya que el “Guatón José” registraba antecedentes policiales; que logró determinar que uno de los Carabineros que hizo entrega del detenido a Bustos fue el Sargento Imas, quien se desempeñaba como chofer del furgón que trasladó al detenido; que a esta conclusión llegó por las características físicas que el funcionario Pantoja le entregó respecto del chofer que conducía el furgón, ya que el vio cuando Lazcano fue entregado a la guardia, o mejor dicho ingresado al cuartel; que Pantoja le informó que el cadáver fue enterrado a unos 100 metros de la carretera 5 norte cerca de una piedra de gran tamaño y que además luego de cubrir el cadáver con tierra entre todos los que participaban en la inhumación habían puesto otra piedra grande para evitar que fuera desenterrado por algunos animales; que Pantoja también le informó que posteriormente, aunque no se supo precisar fecha, Bustos, Díaz y Catalán regresaron al lugar donde se habría inhumado el cadáver, para examinarlo como se encontraba, pero que no había hablado de ello con estas personas; que no es efectivo que su deseo al declarar sea tomar revancha con algunos ex colegas sino colaborar para establecer la verdad. A fojas 673, ratifica la declaración, precisando que en la época en que sucedieron los hechos no trabajaba en la Comisaría de Los Andes, sino que en Antofagasta, pero si mal no recuerda, a su regreso, las primera personas en contarle lo sucedido fueron Manríquez y Pantoja, esto debido a que comenzó a preguntar cómo se hace

cuando se llega a una unidad nueva, quienes serían los delincuentes habituales o que era de los que había conocido; que siempre entre los funcionarios existe un cerco de envidia, pero no podría haber inventado lo que dijo Manríquez o Pantoja, ya que los antecedentes los obtuvo de ellos; que ya no recuerda mucho, estuvo en tratamiento psicológico por estos motivos; que Manríquez y Pantoja le contaron que el detenido habría sido interrogado en el cuartel, pero no sabe quiénes participaron de los interrogatorios.

5.- Declaración a fojas 56, de Enrique Alfonso Alvarez González, quien expresa que se desempeñó en la Comisaría de Los Andes hasta el 7 de marzo de 1991; recuerda que en el año 1983 estaba encargado de la oficina de partes y un día sábado concurrió al cuartel para finiquitar un trabajo administrativo y allí escuchó que había sido detenido un “delincuente habitual” (SIC) de nombre José Lazcano Campos, apodado “Guatón José”, lo que le llamó la atención por la circunstancia que anteriormente había tratado de ser detenido por el Inspector Bustos, pero se había dado a la fuga y en esa oportunidad había sido entregado por Carabineros precisamente a Bustos porque había estado de guardia; que al concluir su trabajo se retiró del cuartel, por lo que no supo de lo ocurrido posteriormente; que pasado un tiempo jamás supo del “Guatón José”, por lo que pensó que se había ido de la jurisdicción; que entre los años 1987 y 1988 por rumores cuya fuente desconoce se enteró que José Lazcano había fallecido en la unidad y que luego para ocultar su muerte habría sido inhumado; que en el año 1988 volvió a la unidad el Inspector Miguel Yáñez, y empezó a indagar respecto de los “delincuentes habituales” de Los Andes y al preguntarle por el “Guatón José”, le contó que había desaparecido de la jurisdicción y de los rumores que había escuchado, ante lo cual Yáñez le manifestó que indagaría para conocer su paradero; que en diciembre de 1990 Yáñez le cuenta que tiene casi establecido que los rumores que se ventilaban respecto a la muerte e inhumación ilegal de José Lazcano, eran efectivos. Dicha declaración es precisada con la extrajudicial contenida en orden de investigar, a fojas 554, en la que señala que cuando conversó con Miguel Yáñez, fue un comentario de pasillo, y no le precisó las circunstancias del deceso del detenido; que por lo comentado por el Subcomisario Yáñez, se enteró que José Renato Lazcano Campos fue trasladado por personal de Carabineros de Los Andes hasta el cuartel policial, por cuanto mantendría un encargo policial por una eventual agresión que habría tenido en contra del

Inspector Angel Bustos Farías, durante un procedimiento en el cual trató de detenerlo, ocasión en que Lazcano logró zafarse y huir. En fojas 569 declara y ratifica lo ya expuesto.

6.- Declaración a fojas 57, de César Hernán Contreras Avello, quien señala que ingresó a la Policía de Investigaciones en 1967 y fue llamado a retiro en 1991 y que desde el año 1984 hasta diciembre de 1990 cumplió funciones en la Comisaría de Los Andes, llegando a ser el segundo jefe de la unidad en calidad de Subcomisario; que en octubre de 1990 el Subcomisario, quien también se desempeñaba en la unidad, Miguel Yáñez, conversó con él a fin de informarle que se había enterado de rumores que indicaban que el “delincuente habitual” (SIC), de nombre José Lazcano Campos, apodado “Guatón José”, habría fallecido en los calabozos y después había desaparecido, ante lo cual le ordenó que iniciara indagaciones para confirmar los rumores en forma reservada y que una vez que reuniera antecedentes concretos que se lo hiciera saber, para a su vez informar a su superior jerárquico; que en diciembre Yáñez hizo uso de su feriado y en ese tiempo él fue trasladado a prestar servicios a la Cuarta Comisaría de la Plaza de Almagro en Santiago, por lo que nunca se enteró de lo que Yáñez logró establecer; que una vez llamado a retiro, a fines de marzo o principio de abril de 1991, se encontró con el Comisario Fabio Lira en el centro de Santiago, quien también se había acogido a retiro, lo acompañó a un trámite y en el trayecto se sentaron a conversar en el Paseo Ahumada y allí salió la conversación respecto de lo que había ocurrido con el “Guatón José”, y Lira reconoció que un día sábado del año 1983 había llegado al cuartel de Los Andes, donde se desempeñaba como segundo jefe y había sido informado del fallecimiento de un detenido, precisamente se trataba del “Guatón José”, quien había sido interrogado por los funcionarios Bustos y Díaz; que el jefe de unidad Hinojosa había decidido trasladar el cadáver en horas de la noche hacia la zona norte, cerca de Los Vilos para sepultarlo; que le informó además que el traslado del cadáver se había realizado en un vehículo policial y que en el viajaban además el Comisario Hinojosa, los funcionarios Angel Bustos, Hernán Díaz, el auxiliar Luis Pantoja, el chofer Jorge Manríquez y el Detective Catalán; que sin embargo, no precisó el lugar ni mayores antecedentes de esta operación, ni tampoco él le preguntó otros antecedentes. A fojas 660, el testigo ratifica su declaración, expresando que le ordenó a Yáñez que recopilara antecedentes de los hechos ocurridos a Lazcano Campos para aclarar si esto realmente había sucedido o no, dejando en claro que no tenía idea del nombre de la víctima, pero

nunca supo los resultados de la investigación, ya que en diciembre de 1990 fue notificado de su traslado a Santiago; que cuando ya estaba jubilado, un día en Santiago, se encontró con Fabio Lira, quien había sido jefe de la unidad de Los Andes, se pusieron a conversar y le dijo que efectivamente en el cuartel había fallecido un delincuente no recuerda su apodo ni tampoco recuerda el nombre de los funcionarios que participaron, pero él se los nombró en su oportunidad y que habían trasladado su cuerpo, pero ignora el lugar exacto; tampoco recuerda que le haya dicho la causa de la muerte, y en realidad en los momentos en que conversaba con Lira cortó la comunicación, ya que le causó incomodidad y no quiso saber más, además que tenía hora al médico en Dipreca.

7.- Declaración de fojas 58 vuelta, de Luis Eduardo Inostroza Padilla, quien expone que se desempeña como jefe de la Comisaría Judicial de Los Andes, cargo que asumió el 26 de diciembre de 1990; que en circunstancias que se encontraba haciendo uso de su feriado, la Comisaría fue objeto de una revisión por el Departamento V de la Policía de Investigaciones, a raíz de lo cual algunos de los funcionarios que se desempeñaban en la unidad, se les aceptó la solicitud de retiro temporal; que el Inspector Juan Zapata Meléndez manifestó temor por algunas represalias que estos funcionarios podían tomar en su contra y el 11 de marzo último (1991) Zapata le informa que alrededor de las 2 de la madrugada, encontrándose de guardia en la unidad recibió un llamado telefónico, profiriendo amenazas en su contra, pero no recuerda su tenor, ante lo cual le ordenó que informara por escrito; que pasado uno, dos o tres días, en circunstancias que pasaba por la guardia, le llamó la atención que sobre el escritorio de la guardia había una carta con un membrete que señalaba Club de Radio Aficionados, pensando que era una correspondencia dirigida a la Comisaría, la tomó, pero allí se dio cuenta que era una carta dirigida al Subcomisario Hernán Díaz, y en cuyo anverso, manuscrito con lápiz de pasta negro se leía “te va a penar el Guatón José”; que ante esta situación anómala inició indagaciones para determinar la procedencia del llamado telefónico y del documento anónimo; que al efectuar una consulta al Detective Mario Urzúa Manzur, actualmente llamado a retiro temporal, éste le manifestó que el “Guatón José” se trataba de una persona que había estado años atrás detenido en el cuartel y que habría fallecido allí, pero no le aportó mayores datos; que posteriormente conversó con el Subcomisario Miguel Yáñez, también llamado a retiro, quien en esa época se desempeñaba como segundo jefe, indicándole que el “Guatón José” era el delincuente José

Lazcano Campos, agregando que quien podría dar mayores antecedentes era el conductor de la unidad Manríquez Fernández; que conversó con Manríquez, quien le manifestó que no conocía al “Guatón José” pero que en una noche de 1982, había sido citado por el jefe de la unidad en ese entonces y que en compañía de otros funcionarios habían trasladado un bulto, en una camioneta blazer, conducida por él hacia el norte del país y que en un lugar determinado se habían bajado los funcionarios a orilla de la carretera, quienes asimismo bajaron el bulto y que posteriormente pasó a recoger a dichos funcionarios, regresando a la unidad; que ante la naturaleza de estos hechos, en compañía de Manríquez concurrió a la Jefatura Zonal de Valparaíso donde le fue tomada declaración extrajudicial al conductor mencionado y además se hizo entrega de la cuenta escrita del Inspector Zapata y del anónimo, con el objeto de que la superioridad adoptara el procedimiento que correspondiera.

8.- Declaración de fojas 60, de Juan Bernardo Zapata Meléndez, quien depone que ingresó a la Policía de Investigaciones en 1975 y en dos oportunidades ha cumplido funciones en Los Andes, la primera en enero de 1986 a enero de 1989 y posteriormente desde octubre de 1990; que los únicos antecedentes que tiene son los que dio a conocer a su jefe directo y en su declaración en el sumario administrativo ordenado por la Dirección; que en el mes de marzo último (1991) en circunstancias que se encontraba de guardia, encontró entre las cartas que estaban sobre el escritorio de la guardia, un sobre dirigido a Hernán Díaz, actualmente Subcomisario de la Unidad de Los Andes, que le llamó la atención por cuanto en el anverso del sobre aparecía una leyenda manuscrita, le parece que con lápiz pasta azul y que indicaba “el muerto te va a penar” y en la línea de abajo “Guatón José”; que hace presente que en esa fecha Hernán Díaz se encontraba de vacaciones y que esta situación le llamó mucho la atención, debido a dos circunstancias, primero, por cuanto anteriormente había visto el mismo sobre pero sin la leyenda, y segundo, porque cuando Díaz regresó de sus vacaciones, la carta ya no se encontraba en el lugar, situación que en todo caso informó a Díaz, quien nada le respondió, sin embargo, tampoco le insistió en el tema; que posteriormente recuerda otra situación que le llamó la atención, encontrándose sentado en un escaño de la sala de espera del cuartel el Subcomisario Miguel Yáñez, actualmente en retiro, al parecer creyendo que nadie lo escuchaba, al ver salir del cuartel a Hernán Díaz, mencionó en voz alta, en forma burlesca y jactancioso, las mismas palabras

que estaban escritas en el sobre antes aludido, agregando una grosería; que hace presente que ya en esa época, a raíz de una investigación efectuada por el Departamento V de la Policía, fueron llamados a retiro varios funcionarios de la unidad, entre ellos, Yáñez; recuerda además, que en la madrugada del día 9 de marzo último (1991), encontrándose de guardia, recibió un llamado telefónico en el que se le amenazaba de muerte, además de recibir insultos, situación que informó por escrito al jefe de la unidad; posteriormente a la semana siguiente encontró otros documentos en su escritorio, una tarjeta con un saludo protocolar de Fernando Vielma Cabrera quien también se había desempeñado como jefe de la Unidad, lo que también le pareció extraño, porque nunca tuvo una relación de amistad con ese señor, por lo que lo consideró una amenaza hacia su persona, tarjeta que entregó posteriormente a funcionarios de Santiago que estaban investigando en la Comisaría; que estima que las amenazas pueden ser consecuencia de una actitud revanchista de algunos funcionarios de la unidad llamados a retiro por la Dirección, por actuaciones reñidas con el derecho y la moral; que al sujeto apodado “Guatón José” no lo conoció. A fojas 675, el testigo ratifica lo antes declarado, agregando que puede decir que esa carta no le llegó a él, sino que se encontraba en el puesto de guardia, y le llamó la atención por lo que tenía escrito afuera con lápiz, en esos momentos no recuerda lo que hizo con la carta, ya han pasado muchos años; y que no tiene idea lo que ocurrió a la víctima y tampoco lo conoció.

9.- Declaración de fojas 61 vuelta, de César Iván González Oyarzo, quien expresa que ingresó a la Policía de Investigaciones en de marzo de 1971, y tuvo que acogerse a retiro en abril del año en curso (1991), por cuanto se le solicitó la renuncia voluntaria, a raíz de una investigación efectuada por el Departamento V de la Policía, en la que se le consultó sobre un posible tráfico de marihuana en la que tendrían participación unos funcionarios de la unidad; que se desempeñó en Los Andes desde 1976 y conoció a un delincuente apodado “Guatón José” de nombre José Lazcano Campos; que a mediados del año 1983 recuerda que un día domingo que no estaba de guardia, concurrió al cuartel a darse una vuelta, como de costumbre, sin embargo, notó un ambiente extraño, ya que las puertas estaban muy cerradas y el personal se encontraba tenso y poco comunicativo, fue entonces que el segundo jefe de la unidad, Fabio Lira Guzmán, le señaló que había ocurrido un hecho extraño en la unidad y que era mejor que se retirara; que lo hizo sin hacer mayores consultas, sin embargo, pasado unos tres o cuatro meses después, en circunstancias que se

encontraban con Fabio Lira sirviéndose un trago, éste le contó lo que había ocurrido señalándole que como consecuencia de un interrogatorio a que había sido sometido el “Guatón José” por parte de los Inspectores Angel Bustos y Hernán Díaz, el detenido había fallecido en el Cuartel, y que para evitar que se conociera de su muerte, se había tomado la determinación de trasladar el cadáver hacia la zona norte, entre Pichicuy y Los Molles, y hacerlo desaparecer; que le contó que el cadáver lo habían trasladado en un carro policial conducido por Jorge Manríquez y que en el habían viajado además, el Comisario Felipe Hinojosa, los Inspectores Bustos y Díaz y el auxiliar Luis Pantoja; que le manifestó que todo el problema ya se había solucionado, por lo que no se preocupara del asunto ni que estimara informarle de ello a la autoridad; que posteriormente, el asunto fue de conocimiento general de los funcionarios de la unidad, hasta que se inició un sumario administrativo, ya que se escuchaban comentarios mal intencionados, incluso en reuniones de funcionarios se hacía hincapié que debían tener mucho cuidado al interrogar a los detenidos, para evitar problemas graves, por lo que se daba por entendido tácitamente que se aludía a la muerte del “Guatón José”; que Lira no le dio detalles respecto del lugar exacto en que se procedió a inhumar el cadáver. En orden de investigar se contiene su declaración extrajudicial a fojas 523, declarando que recuerda que un día domingo alrededor del mediodía, del año 1983, concurrió hasta las instalaciones del cuartel, el cual se encontraba con sus puertas cerradas, lo cual le llamó la atención, de esta forma tocó el timbre y salió el subjefe de la unidad, Fabio Lira, quien le señaló que se retirara ya que había ocurrido una situación difícil al interior; que al otro día comenzó a percibir un ambiente muy extraño entre algunos colegas, ya que existían secretos y miradas un poco comprometedoras, en general, pudo percibir que algo había sucedido, sin embargo, no quiso preguntar por cuanto no le interesaba el tema; que posteriormente, Fabio Lira, encontrándose con trago, y como una forma de desahogarse le comentó que el “Guatón Lazcano” había sido trasladado como detenido al cuartel por los Inspectores Bustos y Hernán Díaz, quienes lo habrían interrogado y que a raíz del método violento e inhumano utilizado falleció en las dependencias del cuartel; que le comentó que a raíz de esta situación, la jefatura tomó la decisión de trasladar el cuerpo en un carro policial manejado por el conductor policial Jorge Manríquez al sector de Pichicuy o Los Molles para proceder a su inhumación; que entendió con el tiempo que este hecho fue de conocimiento general

del personal de la Comisaría. A fojas 646, el testigo ratifica su declaración, señalando que Fabio Lira Guzmán, quien para esos años, era como el segundo jefe de la unidad, le comentó estando en estado de ebriedad, lo que había ocurrido con respecto al ciudadano conocido en el ambiente delictual como “Guatón José”, a lo cual le dijo que no le interesaba mucho el tema, ya que estaban involucrados dos colegas, Bustos y Díaz, con los cuales no tenía ninguna relación personal ni profesional; y le comentó que Lazcano Campos había sido interrogado por los dos oficiales mencionados.

10.- Declaración de fojas 63, de Mauricio Andrés Henríquez Sánchez, quien ingresó a la Policía de Investigaciones en el año 1971, desempeñándose actualmente en la Primera Comisaría Judicial de Santiago; que entre los años 1982 y 1986 cumplió funciones en la Comisaría Judicial de Los Andes y en relación a los hechos expresa que en una fecha que no recuerda, en el año 1983, escuchó algunos comentarios que decían relación con el fallecimiento de un detenido, pero no escuchó ningún otro antecedente al respecto; que hace poco tiempo a raíz de un sumario administrativo iniciado por la institución, se enteró de mayores comentarios, en el sentido que una vez ocurrida la muerte en el cuartel, el cadáver había sido trasladado al norte donde habría sido enterrado, se supo que el jefe de la unidad de entonces, Felipe Hinojosa, y el segundo jefe, Fabio Lira, eran los que habían dispuesto la medida de hacer desaparecer el cadáver, todo lo cual supo por rumores.

11.- Declaración de fojas 64, de Juan Fernando Rocco Negrete, quien expuso que ingresó a la Policía de Investigaciones el año 1975; que entre los años 1978 y hasta abril de 1990 cumplió funciones en la Comisaría Judicial de Los Andes; que en 1986 por comentarios que se escucharon en el interior del cuartel se enteró que a mediados del año 1983, en los calabozos de la unidad, había fallecido un detenido de nombre José Lazcano Campos, apodado “Guatón José”, el que habría sido trasladado hacia el norte del país, donde se le había enterrado clandestinamente. En orden de investigar, a fojas 521, se contiene declaración extrajudicial del testigo, quien expone que al tiempo después se comentaba una historia un poco más clara, se sabía que en el año 1983, no recuerda el mes, un día mientras estaba de guardia el Inspector Pedro Leva Denegri, los Inspectores Bustos y Díaz tenían detenido en el cuartel a José Lazcano y que estos dos mientras interrogaban al detenido, habría fallecido y para ocultar el cadáver, Hinojosa, Lira, Bustos, Díaz,

Manríquez y Pantoja lo habían ido a enterrar al norte del país. A fojas 539 ratifica lo declarado.

12.- Declaración de fojas 93, de Waldo Francisco Valverde Varela, quien señala que ingresó a la Policía de Investigaciones en abril de 1977 cumpliendo servicios en las unidades de Ñuñoa, Antofagasta y a comienzos del mes de febrero de 1983 fue trasladado a la Asesoría Técnica de Valparaíso, permaneciendo en ese lugar hasta mayo de 1990; que en relación a las copias de tarjetas informativas de órdenes de aprehensión que rolan a fojas 49 y 50 que se le exhiben, éstas corresponden a José Lazcano Campos y señala que la letra manuscrita que aparece en la parte inferior de las tarjetas corresponden a la letra suya y significa que con fecha 5 de junio de 1983 cumpliendo funciones, en horas de la mañana desde la Comisaría de Los Andes fue consultado sobre la persona antes indicada, si tenía órdenes de aprehensión pendientes, por lo que respondió afirmativamente, mediante radiograma 412/19; que posteriormente dejó la tarjeta en el mismo kárdex como tarjeta con órdenes de aprehensión pendiente, esperando una respuesta de la Comisaría de Los Andes, para ver qué había pasado con la persona, es decir si había sido detenida por algún tribunal o quedado libre o porque motivo se efectuaba la consulta, lo que no ocurrió; ignora que funcionario fue el que hizo la consulta, puesto que esto se realiza por radiograma. A fojas 642, ratifica y señala que se otorgó la información de la tarjeta informativa de orden de aprehensión de fojas 49 y 50, a la Comisaría de Los Andes el día 5 de junio de 1983, esto significa que de esa comisaría, alguien llamó consultando por los antecedentes de Lazcano Campos, el día señalado en dicha tarjeta.

13.- Declaración de fojas 68, de María Alejandra Lazcano Campos, quien señala que es hermana de José Renato Lazcano Campos, nacido el 1 de enero de 1962, su hermano no tenía domicilio fijo, pero siempre estaba en Los Andes y lo veía muy a lo lejos; que tenía problemas con la justicia pero con delitos menores, no participaba en actividades políticas; que a mediados de 1983 no recuerda la fecha exacta, unos amigos de él, que eran volados, fueron a su domicilio manifestándole que su hermano había sido detenido por Carabineros y que lo habían pasado a Investigaciones; que a los dos días se dirigió a Investigaciones en Los Andes, donde consultó por su hermano y le manifestaron que no se encontraba en ese lugar, ella insistió, pero le dijeron que no lo habían visto; que fue a la

Gobernación de Los Andes para ver si la podían ayudar para saber del paradero de su hermano, días después fue a Carabineros y efectuó la denuncia por presunta desgracia, concurriendo al Juzgado a ratificar la denuncia. A fojas 400 ratifica lo declarado, señalando que su hermano era tranquilo, que no pertenecía a un partido político y los detectives eran quienes lo perseguían.

14.- Declaración a fojas 64 vuelta, de Hernán Enrique Catalán Apablaza, quien señala que ingresó a la Policía de Investigaciones en el año 1977; que entre los años 1982 y 1989 se desempeñó en la Comisaría de Los Andes; que por comentarios que escuchó en el casino de la unidad, el cual se encontraba a su cargo, se enteró que a mediados de 1983 habría fallecido en los calabozos del cuartel un detenido que había sido entregado al Inspector Angel Bustos, y cuyo cadáver lo había hecho desaparecer; que estos comentarios los escuchó unos días después que habrían ocurrido los hechos; que como en la unidad había cierta rivalidad entre grupos de funcionarios, presumió que se trataban de comentarios mal intencionados; que a los pocos días, le preguntó a Bustos si eran efectivos los rumores que había escuchado, pero le dijo que no le diera importancia; que recuerda que a la fecha en que habrían ocurrido los hechos, el jefe de la unidad era Felipe Hinojosa, y el segundo era Fabio Lira; que en su calidad de soltero en aquella época vivía en el cuartel, pero nunca se dio cuenta que ocurriera alguna situación anormal; no es cierto que haya visto algún cadáver en los calabozos o haya participado en su traslado hasta una camioneta policial en una inhumación ilegal. En declaración extrajudicial contenida en orden de investigar a fojas 532, ratifica su declaración. A fs. 573, ratifica y expresa que se decía que a Bustos se le había muerto una persona en el interrogatorio, que en esos días se criticaba a Bustos por su forma de interrogar solitaria, se le llamaba “Columbo”, era muy perseverante y tenía muy buenos resultados. A fojas 644, ratifica sus declaraciones y respecto a la declaración de Bustos, solo es efectivo que él vivía en el segundo piso de la Comisaría porque era soltero, pero no es efectivo que estuviera de turno el sábado o el domingo, de haber sido así esto debiera estar registrado en los libros y por tanto haber permanecido todo un turno, menos aún que él estuviera de acuerdo con Henríquez Sánchez para realizar algún trámite con el detenido; que a esa fecha era el más nuevo en la unidad, y por su juventud los fines de semana viajaba a ver a sus padres lo que pudo haber ocurrido en esas fechas.

15.- Acta de inspección del tribunal, de fojas 258, diligencia que fue reiterada a fojas 475, sin resultados positivos en cuanto al hallazgo del cadáver de la víctima. En el mismo sentido, orden de investigar de fojas 70, para establecer el lugar exacto donde se habría procedido a la inhumación del cadáver de José Lazcano Campos, sin resultados positivos.

16.- Extracto de filiación de José Renato Lazcano Campos, agregado a fojas 89.

17.- Copia del proceso penal Rol 2706 de fojas 95 y siguientes, por presunta desgracia, que se siguió en el Segundo Juzgado del Crimen de Los Andes, iniciado por denuncia de María Alejandra Lazcano Campos, quien compareció el 25 de julio de 1983, señalando que su hermano José Renato Lazcano Campos, a quien le dicen “Guatón José”, desapareció el 14 de junio del presente año 1983, y que fue detenido ese día cuando se encontraba tomando en una quinta llamada “el Topón”, por Carabineros de Los Andes, esto se lo contó un joven; que cuando fue a consultar a Carabineros, le dijeron que se lo habían entregado a Investigaciones, no le dijeron el delito y solamente le manifestaron que se había tirado a choro; que ese mismo día su papá fue a consultar por José y le informaron que no lo tenían y que Carabineros no se lo había entregado; que su hermano vivía en los cerros, ya que sabía que lo buscaba Investigaciones, y solo bajaba a buscar provisiones. A fojas 100, Carabineros de Los Andes, señala que revisado el libro de novedades de la Guardia se pudo constatar que José Renato Lazcano Campos, había sido detenido por Carabineros, el día 5 de junio del año en curso, por sospechoso, a las 04:30 horas, conjuntamente con otros individuos, los que fueron puestos en libertad a las 09:45 horas por no haber méritos en su contra. A fojas 113 vuelta, con fecha 29 de febrero de 1984 aparece que se sobreseyó temporalmente la causa en virtud de lo dispuesto en el artículo 409 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, lo que se aprobó el 22 de marzo de 1984.

18.- Informe de fojas 134, sobre calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la violencia política, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que establece que José Renato Lazcano Campos fue detenido por funcionarios de Carabineros en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en su contra y entregado a la Policía de Investigaciones de Los Andes. Indica que desde entonces se ignora su paradero. Refiere que en una investigación judicial incoada por el delito de

inhumación ilegal, se logró establecer que José Lazcano falleció en el interior del cuartel de la Policía de Investigaciones de Los Andes por las lesiones provocadas por sus captores, quienes posteriormente trasladaron su cuerpo y lo enterraron en un sector de dunas cerca del puente Los Molles, al norte de la ciudad de La Ligua. Menciona que la investigación judicial, sin embargo, no logró ubicar el lugar de su inhumación por lo que fue sobreseída temporalmente. Concluye que considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción que la muerte de José Renato Lazcano Campos fue consecuencia de las torturas y malos tratos a que fue sometido por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido, por lo que lo declaró víctima de violación a los derechos humanos. La misma información fue entregada por la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fojas 401.

19.- A fojas 39 y siguientes, se agrega Orden Reservada 71 de 17 de abril de 1991, que instruye sumario administrativo para esclarecer los hechos ocurridos en la Comisaría Judicial y cuyos antecedentes se pormenorizan en la minuta R sin número, de fecha 18 de marzo de 1991 y minuta 25 del 21 mismo mes y año. Asimismo, se agregó Resolución N° 71/91 de fojas 205, que da término a sumario administrativo a fin de establecer los hechos ocurridos en la Comisaría Judicial de Los Andes y cuyos antecedentes se pormenorizan en la Minuta R sin número de fecha 18 de marzo de 1991 y en Minuta 25 de fecha 21 de marzo de 1991, que tienen relación con el deceso del “delincuente habitual” (SIC) José Renato Lazcano Campos, apodado “Guatón José”. Tiene en cuenta el Dictamen R N° 1 de fecha 9 de enero de 1993 del Jefe de la V Zona Policial, por medio de la cual se sanciona a los siguientes funcionarios con las medidas disciplinarias que se indican: Subcomisario Angel Bustos Farías, de dotación de la Comisaría Judicial de Viña del Mar, con “Cuatro días de permanencia en el cuartel”, por haber incurrido en las faltas contempladas en el Título II, artículos 5 y 6, N° 3, letra a) del Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, al no haber representado las ordenes de su Jefe, por antirreglamentarias e ilegales, participando según reconoce y explica en la inhumación ilegal del cadáver de una persona; Subcomisario Pedro Leva Denegri, de dotación de la Comisaría Judicial Ovalle, “Cuatro días de permanencia en el cuartel” por haber infringido lo dispuesto en el Título II artículo 6 N° 3 Letra a) del Reglamento de Disciplina de la Institución, al no haber cumplido con el debido interés y responsabilidad de las labores de

ayudante de guardia (retén) el día que falleció en los calabozos del Cuartel de la Comisaría Judicial de Los Andes, el particular José Renato Lazcano Campos, al no concurrir al calabozo a constatar el hecho ni preocuparse del destino que se dieron a sus restos mortales; Subcomisario Hernán Díaz Carreño, de dotación de la 21ª Comisaría Judicial de San Antonio “Tres días de permanencia en el cuartel” por idénticos supuestos que el Subcomisario Bustos; Conductor de vehículo policial Jorge Manríquez Fernández, de dotación de la Comisaría Judicial de Temuco con “dos días de permanencia en el cuartel”, por idéntico supuesto que el Subcomisario Bustos; Auxiliar de Consejería Luis Pantoja Canales, de dotación de la Comisaría Judicial de Los Andes, con “dos días de permanencia en el cuartel”, por idéntico supuesto que el Subcomisario Bustos. Se consigna en el referido documento que afecta responsabilidad al Prefecto (R) Felipe Hinojosa Sánchez y al Subcomisario Fabio Lira Guzmán, como consecuencia de los hechos investigados por ser los funcionarios de mayor graduación y quienes ordenaron el procedimiento, la cual sin embargo no puede hacérsela efectiva por haber dejado de pertenecer a la institución, a contar del 2 de febrero de 1987 y del 1 de febrero de 1987, respectivamente. Consta que la Resolución R N° 50 de fecha 26 de agosto de 1993 de la Dirección General, rechaza las alegaciones interpuestas por los funcionarios, modificando las medidas disciplinarias aludidas a todos los inculcados por medio del Dictamen N° 1 de fecha 9 de enero de 1993, del Jefe de la V Zona Policial, por no guardar relación con la extrema gravedad de los hechos investigados y las faltas cometidas y finalmente aplica las medidas disciplinarias de separación a los Subcomisarios Angel Bustos Farías, Pedro Leva Denegri, y Hernán Díaz Carreño y la medida de baja por mala conducta al conductor del vehículo policial Jorge Manríquez Fernández y al auxiliar de conserjería Luis Pantoja Canales. Se resuelve: 1.- aprobar la tramitación del sumario administrativo; 2.- sobreseer al ex prefecto Felipe Hinojosa Sánchez y a los ex Subcomisarios Fabio Lira Guzmán, Angel Bustos Farías, Pedro Leva Denegri y Hernán Díaz Carreño, a pesar de afectarles responsabilidad administrativa en los hechos investigados por haber dejado de pertenecer a la institución a contar de las fechas que se indican en los Decretos N° 196, de 25 de noviembre de 1986, N° 251 de 23 de diciembre de 1986; N° 252 de 10 de diciembre de 1993; y N° 270 de 27 de diciembre de 1993, todos del Ministerio de Defensa Nacional; y confirma la medida disciplinaria por mala conducta aplicada al conductor de vehículo policial, Jorge Manríquez

Fernández, de dotación de la Comisaría Judicial de Temuco, al igual que al auxiliar de conserjería Luis Pantoja Canales, por haber incurrido en las mismas faltas.

20.- Orden de investigar, de fs. 511 y siguientes, la cual concluye sobre la base del análisis de los relatos, que en el año 1983, mes no indicado, en un fin de semana, encontrándose de guardia en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Los Andes, el Inspector Pedro Leva Denegri habría recibido como detenido a José Renato Lazcano Campos quien fue ingresado a los calabozos del citado cuartel. En este lugar habría sido interrogado y golpeado por los inspectores Hernán Díaz Carreño y Angel Bustos Farías, falleciendo en el lugar Lazcano Campos, quien luego fue trasladado en un vehículo hasta el sector de Pichicuy, Pichidangui o Los Molles, donde fue enterrado a objeto de ocultar su cuerpo. En dicho vehículo habría concurrido el Comisario Jefe de Unidad, Felipe Hinojosa Sánchez, Comisario Fabio Lira Guzmán, Inspector Hernán Díaz Carreño, Inspector Angel Bustos Farías, conductor Jorge Manríquez Fernández y el auxiliar Luis Pantoja Canales.

SEGUNDO: Que los medios de prueba enumerados y desarrollados en el considerando precedente, debidamente analizados y ponderados conforme a la normativa probatoria del Código de Procedimiento Penal y relacionados entre sí conforme a las reglas de la lógica, constituyen en conjunto de presunciones judiciales que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 488 del referido código y permiten tener por fundado y legalmente acreditado en este proceso los siguientes hechos:

El día domingo 5 de junio de 1983, José Renato Lazcano Campos, fue detenido en la madrugada en una quinta de recreo ubicada en la ciudad de Los Andes, por funcionarios de Carabineros de Chile, en virtud de registrar una orden de aprehensión, siendo conducido al cuartel de la Comisaría Judicial de Los Andes de la Policía de Investigaciones, sin que quedara registro oficial alguno de esta derivación por parte de Carabineros de Chile ni de su ingreso como detenido por parte de los funcionarios que lo recibieron en la aludida Comisaría Judicial y sin que se adoptara ninguna conducta tendiente a ponerlo a disposición del Tribunal competente. En tales circunstancias, Lazcano es encerrado por personal policial en los recintos del calabozo, entre los cuales se encontraba un funcionario policial que anteriormente había intentado detenerlo, sin éxito, debido a que Lazcano había logrado zafar y huir de dicho funcionario. Encontrándose el detenido en el calabozo,

personal policial lo interrogó y le propinó malos tratos, falleciendo en ese momento y lugar y sin que entretanto se adoptara ninguna acción tendiente a auxiliarlo o trasladarlo de manera inmediata hasta algún establecimiento de salud. Luego, para encubrir su muerte y las circunstancias en que ella se produjo, el cadáver fue trasladado en horas de la noche por los efectivos policiales en un carro policial, hasta un sector de la zona norte, ubicado entre los La Ligua y Los Vilos, para ser inhumado sin sujeción a ninguna formalidad, no pudiendo determinarse a la fecha, el lugar exacto donde yacen sus restos.

CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS.-

TERCERO: Que, en cuanto al delito de secuestro calificado, cabe tener presente que el texto del artículo 141 del Código Penal, había sido modificado días antes de la perpetración del hecho punible en virtud de la Ley N° 18.222, publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de mayo de 1983, quedando su tenor del modo siguiente:

"Artículo 141.- El que sin derecho encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados.

En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito.

Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio.

Si en cualesquiera de los casos anteriores, el encierro o la detención se prolongare por más de quince días o si de ello resultare un daño grave en la persona o intereses del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo.

El que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación, o algunas de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N° 1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a muerte".

La figura típica que corresponde aplicar al presente caso es la del artículo 141 inciso cuarto antes transcrito. En efecto, no cabe duda que la conducta típica de los agentes policiales fue la de encerrar a la víctima, esto es, mantenerlo en un lugar donde no podía

escapar, siendo éste un lugar de detención público. Tampoco no hay duda que ese encierro se produjo contra la voluntad del afectado. Y este encierro se hizo sin derecho, puesto que operó, según se ha dicho en doctrina, ilegítimamente en una situación no autorizada por la ley o en que el agente ha excedido el ejercicio de un derecho. En efecto, como se ha razonado, no hubo ninguna conducta que permita presumir que el detenido sería presentado a la autoridad judicial competente, al punto que ni Carabineros anotó su derivación a la unidad policial –incluso señaló haberlo dejado libre en la mañana del día 5 de junio de 1983- ni los funcionarios de la Policía de Investigaciones anotaron su ingreso como detenido en algún registro oficial.

Siguiendo con el análisis, lo que efectivamente sí se encuentra acreditado, es que el sujeto activo del delito durante un interrogatorio propinó malos tratos al afectado, esto es, le causó un grave daño, más no hay elementos probatorios suficientes para aseverar que ese sujeto activo además cometió el delito de homicidio, esto es causando la muerte dolosamente de la víctima, sea por acción u omisión.

En consecuencia, los hechos descritos cabe calificarlos como delito de secuestro con grave daño, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso 1° en relación con su inciso 4° del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos, pues si bien la víctima fue detenida primitivamente en virtud de registrar una orden de aprehensión, lo cierto es que, ya encontrándose Lazcano en la Comisaría Judicial de la Policía de Investigaciones de Los Andes, fue mantenido en un encierro ilícitamente, en cuanto ninguna conducta de los agentes demostró que éste sería puesto a disposición de la autoridad judicial competente, sin que, como se dijo, se registrara oficialmente en momento alguno a Lazcano como detenido, más todavía cuando se estableció que uno de los interrogadores tiempo atrás intentó detener a Lazcano con un resultado infructuoso, dado que logró liberarse de éste, todo lo cual permite presumir que la mantención del encierro que le afectó no tuvo como motivo real la orden de aprehensión pendiente. El grave daño se configura en razón de los antecedentes probatorios que se han referido en el considerando primero, de los cuales cabe presumir que José Lazcano Campos antes de morir en el calabozo de la unidad policial, sufrió maltratos durante el interrogatorio efectuado por personal policial. En efecto, el testigo Miguel Yáñez Yáñez, afirma que el inculpado Pantoja le contó que el día en que

ocurrieron los hechos, escuchó gritos provenientes del calabozo, a lo que se une que no hubo ningún intento de comunicarse o trasladar a la víctima a un recinto de salud en el contexto de su fallecimiento. Además, es dable presumir que los funcionarios policiales con la inhumación del cadáver, realizaron todo cuanto era necesario para ocultar las circunstancias precisas en que se produjo la muerte de Lazcano, lo que es ratificado por el hecho que no se pudo encontrar el lugar exacto en que sepultaron sus restos, pese a las diferentes diligencias que se practicaron con tal fin, y teniendo en cuenta que el testigo Yáñez declaró que Pantoja le señaló que supo que algunos de los funcionarios policiales involucrados, tiempo después, regresaron al lugar de la inhumación para verificar en qué condiciones se encontraba el lugar del entierro.

CUARTO: Que, los hechos establecidos en el considerando segundo también configuran el delito de inhumación ilegal, conforme a lo dispuesto por el artículo 320 del Código Penal, que señala: “El que practicare o hiciere practicar una inhumación contraviniendo a lo dispuesto por las leyes o reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurrirá en las penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales”, actualmente seis a diez unidades tributarias mensuales.

No cabe duda alguna que todos los elementos probatorios referidos en el fundamento primero de esta sentencia dan cuenta que en horas de la madrugada, en un lugar ubicado entre La Ligua y Los Vilos, agentes de la Policía de Investigaciones procedieron a enterrar a José Lazcano Campos, sin dar cumplimiento a ninguna formalidad sanitaria. En efecto, particularmente se tiene en cuenta la denuncia deducida por Roberto Rozas Aguilera, Comisario de la Policía de Investigaciones, que da cuenta que en el sumario administrativo incoado en la institución se estableció tal circunstancia con el conjunto de los relatos obtenidos, el que finalmente derivó en una resolución que sancionó a los involucrados, con el alejamiento de la institución. En el mismo sentido, el testigo Miguel Yáñez Yáñez da cuenta de la sepultación del cadáver de la víctima, lo que sabe porque el inculpado Pantoja se lo contó directamente. Asimismo, los testigos César Hernán Contreras Avello y César Iván González Oyarzo, expresaron que escucharon igual relato de parte de otro de los inculpados, Fabio Lira Guzmán, actualmente fallecido, abonando más

sus declaraciones, la circunstancia que este último era uno de los dos funcionarios que ejercía el poder de mando en el cuartel. Finalmente, debe tenerse presente la declaración de María Alejandra Lazcano Campos, quien días después de la desaparición de su hermano, preguntó en la Policía de Investigaciones acerca de su paradero, negándole que estuviere detenido en ese cuartel, elementos probatorios que son precisos, graves, directos y concordantes para tener por establecida la inhumación sin formalidad alguna de la víctima.

QUINTO: Que a fojas 779 el abogado don Francisco Jara Bustos, por la parte querellante María Alejandra Lazcano Campos, deduce acusación particular en contra de los procesados, pidiendo que además sean condenados como autores del delito de aplicación de tormentos. Indica que el tribunal al momento de fijar los hechos da cuenta que José Renato Lazcano Campos recibió tratos crueles en un interrogatorio que habrían causado su muerte. Explica que el delito referido se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 150 del Código punitivo vigente a la época de la detención de la víctima, el que sancionaba en su inciso primero “a los que decretaren o prologaren indebidamente la incomunicación a un reo, le aplicaren tormentos o usaren con él de un rigor innecesario”. Menciona que este delito pertenece a la categoría de crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad y que la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes define por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o de intimidar o coaccionar a una persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores sean ocasionados por funcionarios públicos u otras personas en ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideraran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a éstas”. Manifiesta que los tratos violentos que causaron la muerte de don José Renato Lazcano Campos en el marco de un interrogatorio constituyen sufrimientos graves de tipo físico y psicológico, paradigmáticos de la tortura, por lo que no debe admitirse la hipótesis del concurso medial, al ser los actos de tortura claramente distinguibles de los otros ilícitos, debiendo aplicarse el concurso real para dar cuenta del reproche que impone el Derecho Internacional.

SEXTO: Que a juicio de este sentenciador, los elementos probatorios reseñados en el considerando primero resultan insuficientes, para tener por establecido el delito referido en el artículo 150 del Código Penal, particularmente porque del mérito de las declaraciones de los testigos que constan en autos no se desprenden antecedentes concretos que den cuenta que el personal policial que interrogó y propinó malos tratos a la víctima, hayan además superado tales acciones al punto de aplicar tormentos en su perjuicio, recordando a este respecto que precisamente las actuaciones posteriores del personal policial estaban destinadas a ocultar las circunstancias específicas del fallecimiento de Lazcano. De este modo, no hay certeza jurídica en el grado de "convicción" que requiere el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal respecto a este delito, razón por la cual será desestimada la petición del acusador particular. En cualquier caso, la aplicación del tormento se encontraría subsumida como una de las variantes del daño configurador de uno de los elementos del tipo penal calificado de secuestro.

EN CUANTO A LA EXCEPCION DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.-

SEPTIMO: Que a fojas 929 y siguientes, 940 y siguientes, 946 y siguientes, 952 y siguientes, 958 y siguientes, el abogado Jorge Balmaceda Morales, en representación de los acusados Hernán Díaz Carreño, Pedro Leva Denegri, Angel Bustos Farías, Jorge Manríquez Fernández y Luis Pantoja Canales, respectivamente, opone como excepción de previo y especial pronunciamiento la prescripción de la acción penal, fundada en que los hechos investigados supuestamente se habrían producido en junio de 1983, razón por la cual y de conformidad a los artículos 433 del Código de Procedimiento Penal y 93 N° 6, 94 y 95 del Código Penal, se extinguió la responsabilidad penal. Refiere que las circunstancias en las que se desenvuelve el delito no están comprendidas dentro de los requisitos establecidos por la Ley 20.357. Asevera que la época en que se produjeron los ataques generalizados de los agentes del Estado, éstos se ejecutaron siempre en contra de personas militantes de partidos políticos de izquierda o simpatizantes, así como participantes de otros grupos extremistas contrarios al régimen militar; sin embargo, la víctima de autos nunca fue simpatizante o militante de un partido político de izquierda, ni tampoco fue parte de algún grupo extremista, sino que era un delincuente habitual de la localidad de Los Andes, quien

se dedicaba al tráfico de estupefacientes, robo de ganado y hurto, por lo cual siempre mantuvo órdenes de detención en su contra, lo que se acreditó mediante la tarjeta de ordenes de aprehensión, agregada a fojas 40 y siguientes. Señala que el plazo de prescripción respecto del delito de secuestro con grave daño causado e inhumación es de diez años, por consiguiente, la prescripción de la acción penal se produjo en el año 1993. Por otra parte, si se estimare que los plazos de prescripción estuvieron suspendidos durante la vigencia del régimen miliar de gobierno, y que dicha prescripción empezó nuevamente a correr el año 1990, igualmente han transcurrido más de 10 años, por lo que el plazo de dicha prescripción también está cumplido.

OCTAVO: Que a fojas 976 y siguientes, la abogada Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evacuando el traslado, señala que hay imposibilidad de aplicar la prescripción de la acción penal en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Indica que el secuestro calificado tiene el carácter de crimen contra la humanidad y que las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Aduce que estos hechos formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil y sus ejecutores tenían conocimiento de que se estaba llevando a cabo dicho ataque. Refiere que estos requisitos están señalados en el artículo 7° del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y son los requeridos por la jurisprudencia emanada de los Tribunales internacionales Ad-hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda, para considerar a un hecho ilícito un crimen contra la humanidad. Por otro lado, expresa que la obligación de investigar, perseguir y sancionar delitos como el de autos, y la prohibición de auto exoneración de los mismos, emanan de los Principios Generales de Derecho Internacional vigentes en la época de los hechos, y que posteriormente han sido afirmados y reiterados, mediante el reconocimiento por parte de la comunidad internacional, de la cual Chile forma parte, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre el punto.

A su turno, a fojas 984 el abogado Francisco Jara Bustos, por la parte querellante, María Alejandra Lazcano Campos, evacuando el traslado, señala que al estar en presencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme al ordenamiento jurídico interno y las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, existe una obligación internacional de ius cogens de investigar y sancionar a los autores de estos crímenes reconociéndose su imprescriptibilidad. Indica que el concepto de crímenes de lesa humanidad corresponde, al menos desde 1945 a una categoría dogmático-jurídica bien identificable. Señala que estos crímenes requieren un contexto de violencia generalizada que permite diferenciarlos de aquellos actos que consisten en la mera lesión de bienes jurídicos individuales. Manifiesta que las consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Señala que la mejor definición de estos crímenes es que la está contenida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluso para su juzgamiento por parte de Tribunales nacionales. Concluye que hoy no existen dudas al respecto a que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles de acuerdo a las normas de ius cogens y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, lo cual es un hecho público y notorio.

NOVENO: Que como cuestión previa cabe dilucidar si los delitos por los cuales se ha acusado a los encausados constituyen delitos o crímenes de lesa humanidad. A este respecto, es dable traer a colación la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia. Así el fallo dictado en autos Rol N° 39660-2017 consideró: *“Cuarto: Que esta Corte reiteradamente ha señalado que se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que contrarían de forma evidente y manifiesta el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase*

de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes (SSCS Rol N° 6.221-10 de 11 de octubre de 2011, Rol N° 1686-13 de 20 de marzo de 2014, Rol N° 3641-14 de 30 de junio de 2014, Rol N° 1813-14 de 2 de septiembre de 2014, Rol N° 4549-14 de 16 de octubre de 2014, Rol N° 21.177-14 de 10 de noviembre de 2014 y Rol N° 25.657-14 de 11 de mayo de 2015)”. **“Quinto:** Que, tanto la preceptiva internacional como nacional relativa a la materia en estudio, en especial el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Ley N° 20.357 del año 2009, que tipifican crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, respectivamente, así como la jurisprudencia de los Tribunales y organismos internacionales que los recurrentes reseñan en sus libelos, hoy son contestes en considerar como elementos típicos del crimen contra la humanidad -en lo que aquí interesa-, el que las acciones que los constituyen sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y el conocimiento de dicho ataque por el agente (así también se ha recogido en SSCS Rol N° 559-04 de 13 de diciembre de 2006, Rol N° 7089-09 de 4 de agosto de 2010, Rol N° 6.221-10 de 11 de octubre de 2011, Rol N° 5969-10 de 9 de noviembre de 2011, Rol N° 1686-13 de 20 de marzo de 2014, Rol N° 3641-14 de 30 de junio de 2014, Rol N° 1813-14 de 2 de septiembre de 2014, Rol N° 15.507-13 de 16 de septiembre de 2014, Rol N° 4549-14 de 16 de octubre de 2014, Rol N° 21.177-14 de 10 de noviembre de 2014, y Rol N° 2931-14 de 13 de noviembre de 2014)”. **“Sexto:** Que, con ocasión del estudio del elemento de contexto del crimen de lesa humanidad, contenido en el preámbulo del artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la doctrina más autorizada ha señalado que dicho precepto convierte en crimen de lesa humanidad los actos individuales enumerados en dicha disposición, en tanto cumplan con el test sistemático general. Esta prueba se propone para garantizar que los actos individuales, aislados o aleatorios, no lleguen sin más a constituir un crimen de lesa humanidad. Mientras que el término “generalizado” implica un sentido más bien cuantitativo: que un acto se llevará a cabo a gran escala, involucrando a un gran número de víctimas, la expresión “sistemático” tiene un significado más bien cualitativo que

requiere que el acto se lleve a cabo como resultado de una planificación metódica. Sin perjuicio que la jurisprudencia siempre ha optado por una lectura disyuntiva o alternativa de estos elementos, se ha destacado que lo más importante ya no es el significado aislado que aporta cada uno de estos elementos expresados de modo alternativo, sino el que adquieren al interconectarse, en la medida en que la “comisión múltiple” debe basarse en una “política” de actuación, sólo su existencia convierte múltiples actos en crimen de lesa humanidad. Este elemento -de la política- deja claro que es necesario algún tipo de vínculo con un Estado o un poder de facto y, por lo tanto, la organización y planificación por medio de una política, para categorizar de otro modo los delitos comunes como crimen de lesa humanidad (Ambos, Kai. “Crímenes de Lesa Humanidad y la Corte Penal Internacional”, Revista general de Derecho Penal N° 17, año 2012)”. Que, en este sentido, los antecedentes de autos demuestran que los ilícitos objeto de la acusación corresponden a crímenes de lesa humanidad, puesto que están insertos en un ataque generalizado contra la población civil, que no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima. En el presente caso lo preponderante deriva de la consideración que el régimen imperante a la época de la muerte del ofendido, correspondió con una política estatal de control del orden público que autorizó a los agentes del Estado para detener, mantener encerrados, maltratar y privar de la vida a los ciudadanos, en la especie a una persona en situación de manifiesta vulnerabilidad, por su condición socio-económica, utilizando para ello los medios dispuestos a la institución, en la especie, los calabozos y los vehículos policiales estatales. A ello se suma, el prolongado silencio que operó después de la comisión de los hechos punibles, la negativa de información requerida por la hermana de la víctima durante los días siguientes e incluso la falsedad de los antecedentes entregados por Carabineros de Los Andes, manifestada en el proceso seguido por presunta desgracia en que aseguró que revisado el libro de novedades de la Guardia se pudo constatar que José Renato Lazcano Campos, había sido detenido por Carabineros, el día 5 de junio del año en curso, “por sospechoso”, a las 04:30 horas, conjuntamente con otros individuos, los que fueron “puestos en libertad” a las 09:45 horas por no haber méritos en su contra, todo lo cual pone de manifiesto que los agentes policiales contaron al menos con el beneplácito del aparato estatal que controlaba el orden público. En concordancia con lo razonado, el Estado

de Chile reconoció a la víctima como víctima de violación a los derechos humanos. En efecto, según se dijo, el informe de fojas 134, sobre calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la violencia política, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece que José Renato Lazcano Campos fue detenido por funcionarios de Carabineros en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en su contra y entregado a la Policía de Investigaciones de Los Andes y que desde entonces se ignora su paradero. Refiere que en una investigación judicial incoada por el delito de inhumación ilegal, se logró establecer que José Lazcano falleció en el interior del cuartel de la Policía de Investigaciones de Los Andes por las lesiones provocadas por sus captores, quienes posteriormente trasladaron su cuerpo y lo enterraron en un sector de dunas cerca del puente Los Molles, al norte de la ciudad de La Ligua. Menciona que la investigación judicial, sin embargo, no logró ubicar el lugar de su inhumación por lo que fue sobreseída temporalmente. Concluye que considerando los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior llegó a la convicción que la muerte de José Renato Lazcano Campos fue consecuencia de las torturas y malos tratos a que fue sometido por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido, por lo que lo declaró víctima de violación a los derechos humanos. La misma información fue entregada por la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fojas 401. Por estas razones, los hechos materia de la acusación deben ser calificados como delito de lesa humanidad.

DECIMO: Que, habiéndose dilucidado que los delitos cometidos son de lesa humanidad, cabe tener presente, tratándose en la especie de la investigación de este tipo de crímenes, no cabe aplicar las normas de prescripción internas del país, sino que operan las normas internacionales que se refieren a la imprescriptibilidad en este tipo de delitos, pues ello es un imperativo del derecho y una manifestación patente del Derecho Penal Humanitario en esta materia. No es posible concebir que puedan cometerse impunemente delitos por agentes del estado y que el régimen haga todo lo posible para que esos delitos no se investiguen y menos sancionen y luego invocar las normas que permitirían la prescripción tratándose de delitos comunes. Por otro lado, el paso del tiempo, como fundamento de toda prescripción, está concebida para consolidar situaciones de hecho o dar seguridad a las relaciones de derecho, pero no puede operar en estos casos, en los que precisamente se pretende aclarar, dar luces, explicar la ocurrencia de determinados hechos

de carácter grave que no sólo afectan a la comunidad interna del país sino que la conciencia jurídica universal. En mérito de lo señalado, esta excepción de previo y especial será desestimada.

EN CUANTO A LA PARTICIPACION DE LOS ACUSADOS

UNDECIMO: Que a fojas 13, declara el acusado Angel Nicanor Bustos Farías, quien señala que a fines de 1973 fue destinado a la Comisaría de Los Andes, donde permaneció hasta mayo de 1990, fecha en que fue trasladado a la Comisaría de Papudo; que en junio de 1983, recuerda que era un día domingo, en circunstancias que se encontraba de guardia, alrededor de las 9:30 horas de la mañana llegó Carabineros llevando a un detenido cuyo nombre no recuerda, señalando que había sido consultado a la Unidad la noche anterior o en horas de la madrugada y que tenía órdenes de aprehensión pendiente de los Juzgados de Los Andes; hace presente que el detenido había sido detenido previamente por Carabineros y como las relaciones entre ambas policías eran buenas, generalmente se consultaba a la Policía de Investigaciones de Los Andes la situación de un detenido por Carabineros; que revisó los kárdex existentes en la unidad, constatando que aquella persona tenía pendientes diversas órdenes de aprehensión emanadas de los Juzgados de Los Andes; ante tal situación recibió al detenido y luego de allanarlo y revisarlo, se percató que no tenía documentación y que físicamente se mostraba bien; que a esta persona no la conocía, pero presentaba un aspecto descuidado, sin afeitarse, ojos enrojecidos, de mal aliento, vestido pobremente, de contextura delgada; que una vez concluida la revisión lo trasladó hasta los calabozos ubicados en un ala posterior del primer piso, encerrándolo con llave; que enseguida se dirigió a la guardia dejando las llaves del calabozo en el perchero, luego ingresó al detenido al libro respectivo donde consignó sus datos, anotando el nombre que le dio, la hora de detención y seguramente, también, señaló que había sido entregado por Carabineros; que efectuó los trámites propios de un oficial de guardia, como atender el teléfono, la radio, atender público, etc.; que hasta ese momento se encontraba solo en la unidad, posteriormente llegó el Retén de Servicio, que era el Inspector Pedro Leva; que alrededor de las 10:00 de la mañana, se dio una vuelta por los calabozos, constatando que el detenido se encontraba sin novedad; que aproximadamente a las 11:00 horas, de nuevo, se dirigió al calabozo con el objeto de tomarle los datos para confeccionar el parte

correspondiente con el cual iba a ser puesto a disposición del tribunal por intermedio de la cárcel, y al llegar a la puerta del calabozo gritó al detenido para que se levantara, abriendo la ventanilla metálica de la puerta, sin embargo, el sujeto nada respondió, procedió a abrir la puerta y se percató que estaba tirado en el piso, de costado, dándole la impresión que estaba durmiendo; que trató de despertarlo, pero no reaccionó, dándose cuenta que algo le ocurría, recuerda que le tomó el pulso pero al parecer no tenía, trató de verle los ojos y también con un espejo que fue a buscar a la oficina se percató que no respiraba o lo hacía en forma muy débil; de inmediato trató de reanimarlo, haciéndole masajes cardiacos y respiración boca a boca, pero como tampoco reaccionó, de inmediato corrió a la guardia y marcó el número telefónico de la posta del Hospital para solicitar asistencia médica; sin embargo, nadie contestó su llamado; en ese preciso momento golpearon la puerta del cuartel y al abrirla se percató que habían llegado uno o dos funcionarios, pero no recuerda si era el chofer Manríquez u otro funcionario; le ordenó a esta persona que fuera de inmediato a buscar al jefe y al segundo jefe de la unidad, que eran el Comisario Felipe Hinojosa y el Subcomisario Fabio Lira; rápidamente llegaron al cuartel los nombrados jefes, a quienes procedió a dar cuenta de lo ocurrido y se dirigieron al calabozo, donde se examinó el cuerpo del detenido, constatándose que estaba fallecido; recuerda que también, junto al grupo, estaban en el calabozo el Detective Hernán Díaz y otras personas que andaban en la unidad, como el Detective Hernán Catalán, no recuerda si el auxiliar Luis Pantoja concurrió al calabozo; que les manifestó a los jefes Hinojosa y Lira que daría cuenta al tribunal en reiteradas ocasiones, por cuanto solo se trataba de una muerte natural o fortuita, sin embargo, estos manifestaron que debían esperar, entonces él se puso a disposición de la jefatura, puesto que por su calidad de subalterno no podía insistir en el trámite a seguir; que posteriormente, no recuerda si fue Hinojosa o Lira, quien señaló que el asunto se iba a arreglar internamente, se ordena que en horas de la tarde vuelvan al cuartel las personas que estaban de servicio, esto es, el retén de servicio, el auxiliar Pantoja, el chofer Manríquez, el entonces Detective Hernán Díaz y le parece que Hernán Catalán; que alrededor de las 19:30 horas, se reunieron en la Comisaría las personas citadas y le ordenaron a Pedro Leva que se le relevara de la guardia; luego entre todas las personas que estaban en el cuartel, procedieron a sacar el cadáver del calabozo y lo trasladaron hasta una camioneta institucional, modelo Blazer y al parecer tapado con una manta, el cuerpo fue

colocado en la parte posterior del vehículo, enseguida el jefe de la unidad ordena que se suban a la camioneta, el chofer Manríquez, el auxiliar Pantoja, el Detective Hernán Díaz, el segundo jefe Fabio Lira y él; también se sube Hinojosa y ordena al conductor dirigirse hacia la carretera 5 Norte, emprendiendo el viaje alrededor de entre las 20:00 y 20:30 horas; que recuerda que se dirigieron hacia el norte, pasaron la cuesta El Melón, posteriormente se detuvieron en una ocasión, porque alguien iba a orinar y cuando llevaban entre 4 a 5 horas de viaje, el jefe ordenó detener el vehículo en la berma izquierda de la carretera, hacia el mar; que él sabía que el objeto del viaje era ocultar el cadáver y le parece aunque no está tan seguro que en el camino se señaló que el cadáver iba a ser enterrado; cuando se detuvieron en una zona que estaba completamente oscura, todos descendieron del vehículo, salvo el chofer Manríquez; procedieron a bajar el cadáver entre todos porque pesaba bastante, lo llevaron, internándose unos 20 metros en una zona de tierra, en dirección a la playa, cruzando previamente una alambrada; se detuvieron y en este lugar el auxiliar Luis Pantoja, portando una pala procedió a cavar en la tierra, mientras ellos observaban en el lugar; entretanto el chofer, le parece que había salido del lugar donde los había dejado y se había estacionado más adelante con las luces apagadas; no recuerda si el chofer los esperó sólo o acompañado de otro funcionario; que luego que Pantoja cavó una media hora, entre todos, nuevamente procedieron a introducir el cuerpo del cadáver en el hoyo, y el mismo Pantoja lo cubrió con tierra; enseguida volvieron en silencio caminando, hacia el sector donde se encontraba estacionado el vehículo esperándolos y emprendieron el viaje de regreso, llegando nuevamente a la unidad en horas de la madrugada; que no recuerda que hayan hablado en el regreso ni que el jefe haya ordenado no hablar de lo ocurrido, lo que a su juicio no era necesario, porque todos los que trasladaron el cadáver sabían de la gravedad del asunto y por ello decidieron permanecer en silencio; que no recuerda el lugar donde se procedió a la sepultura del cadáver; que él en esa época no conocía esta zona, de lo que está seguro es que fue muchos kilómetros pasando la cuesta El Melón, además era una noche muy oscura y no recuerda alguna referencia para determinar el sitio exacto; que todas las personas que trasladaron el cuerpo hasta el sector donde lo enterraron sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y no resulta lógico que alguien pueda alegar desconocimiento; varias oportunidades el día de los hechos le pidió o le insinuó a Hinojosa que diera cuenta de lo ocurrido al tribunal, pero él dispuso otra cosa, a lo que no se podía

negar por ser subordinado; no dieron cuenta tampoco en forma personal de los hechos ni al Juez ni a otros jefes de la Institución, porque siguió el conducto regular, ya que todos los hechos debe darlos a conocer primero a su jefe superior directo, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la policía; que no es efectivo que el detenido haya sido golpeado o torturado por él, ni por otros funcionarios; no es efectivo que al detenido lo haya consultado en la Asesoría Técnica de Valparaíso e ignora porque aparece una anotación manuscrita en la tarjeta informativa de órdenes de aprehensión de fecha 5 de junio de 1983 correspondiente al delincuente José Lazcano Campos y que se mantenía en la Prefectura de Valparaíso; que guardó silencio todos estos años, simplemente obedeciendo órdenes superiores; que sobre esta situación fue interrogado por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Santiago, a raíz de un anónimo que se había enviado a Santiago y posteriormente también presentó declaración en el sumario administrativo incoado; que el detenido le dijo su nombre, pero no lo recuerda, anotó su nombre en un papel, lo revisó, aún Carabineros presente, lo llevó al calabozo y lo dejó con llave, como era domingo estaba solo y tuvo que realizar todas las funciones habituales del lugar; que cerca de las 08:30 llegó el ayudante de guardia; que cada cierto tiempo iba a dar una vuelta al calabozo; cerca de las 10:15 horas vuelve al calabozo y el detenido no le contestaba, lo comienza a mover porque no reaccionaba; le acercó un espejo para ver su respiración, la que no salía, ante lo cual sale en busca de colegas, le hace maniobras de respiración; que le auxiliaron Olea, Denegri, Catalán y Pantoja, a éste le dijo “vaya a buscar al jefe”; que llegaron el jefe y el segundo jefe y constataron la situación del detenido; que el detenido estuvo prácticamente todo el día en el cuartel, dentro del calabozo, hasta que cerca de las 21:00 horas el jefe Hinojosa, dijo que el problema se solucionaría entre ellos, citó a Fabio Lira, Hernán Díaz, Luis Pantoja, Jorge Manríquez y él, que estaba de guardia y ordenó que había que ir a enterrar al detenido; que lo subieron arriba de una camioneta, envuelto en una manta, lo trasladaron al norte, cerca de las 24:00 horas, se detuvieron al borde de la carretera, no recuerda en qué lugar, se bajaron todos, incluyendo él, sacaron al detenido, pasaron una alambrada, avanzaron unos 30 metros, y en ese momento Pantoja hizo un hoyo, pues comentó que había trabajado en un cementerio, y procedió a enterrarlo; que no interrogó al detenido, sólo le preguntó datos acerca de su identidad, pero como no estaba totalmente consciente, no eran claras sus respuestas. A fojas 623, aclara que el detenido había sido

solicitado previo acuerdo con Carabineros y el oficial de guardia del día sábado anterior a su guardia; que su horario era de 08:00 horas de la mañana del día domingo hasta las 08:00 de la mañana del día lunes; que su relevo debía llegar a las 08:00 de la mañana del día lunes; que no tiene conocimiento de la hora en que llegó el relevo ya que ellos llegaban al cuartel y el jefe les despachó para la casa; que se enteró que era un delincuente habitual cuando Carabineros se lo entregó, le dijo que tenía orden de aprehensión y ficha policial, pero antes de eso no lo conocía; que respecto a las fichas que se le muestran, la de fojas 41 donde aparece una foto no la reconoce pero la de fojas 42 sí, porque la tenía el jefe Hinojosa porque alguien se la pasó, cree ese mismo día, pero no recuerda muy bien; que el detenido no venía con apariencia buena, se veía con los ojos rojos, delgado, cochino como que no había dormido, se veía trasnochado con barba de unos días y él lo recibió porque estaba pedido por Henríquez y no se puede estar peleando con el compañero; que no se explica lo que sucedió, pudo haber muerto por un ataque al corazón, suponiendo ya que no sabe; que no escuchó ningún ruido o grito, solo se dedicó al trabajo de escritorio y en ratos entraba gente y salía, pero nunca escuchó gritos.

DUODECIMO: Que respecto a la participación del acusado Angel Nicanor Bustos Farías, cabe hacer una distinción en lo concerniente a los ilícitos que se le atribuyen.

En lo relativo al delito de inhumación ilegal, el encausado Bustos reconoce su participación en los hechos que configuran tal ilícito, siendo su confesión posible y verosímil, atendida sus circunstancias y condiciones personales, y concordante con las circunstancias y accidentes del hecho punible. Su participación lo es en calidad de autor, por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal. En efecto, el procesado Bustos reconoce que conjuntamente con otros agentes policiales, cargaron el cadáver de la víctima desde el calabozo del cuartel a una camioneta institucional, que luego arribaron a un sitio ubicado en el norte, y que ahí, también con el personal policial –menos el conductor- nuevamente cargaron el cuerpo, adentrándose unos veinte metros hacia la playa, y luego que Pantoja cavó una fosa, entre todos introdujeron el cadáver y finalmente Pantoja lo tapó con tierra, todo lo cual permite tenerlo por confeso en el hecho constitutivo del delito de inhumación ilegal.

En cuanto al delito de secuestro calificado, si bien el acusado en su declaración indagatoria se sitúa en el tiempo y lugar en la comisión de los hechos, reconociendo que el día 5 de junio de 1983 recibió al detenido Lazcano por parte de funcionarios de Carabineros, en circunstancias que se encontraba como único funcionario presente en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile de Los Andes y que lo encerró con llave en un calabozo de los Andes, niega haber conocido previamente al detenido, rechazando haberlo interrogado y maltratado, asegurando que lo anotó o registró como detenido y que al percatarse que éste no respiraba, habría llamado a un establecimiento de salud, todo lo cual se desvanece con el mérito de los siguientes antecedentes probatorios:

A.- La imputación contenida en orden de investigar, a fojas 185, que contiene la declaración extrajudicial del testigo Roberto Rozas Aguilera, Comisario de la Policía de Investigaciones, quien fue el Fiscal del sumario administrativo, por los hechos ocurridos en junio de 1983, quien da cuenta que se estableció que personal de Carabineros de Los Andes, entregó a un detenido en la Comisaría Judicial de Los Andes donde fue recibido por el oficial de guardia; y que un funcionario de apellido Bustos, se interesó por dicho detenido, por lo que quedó bajo su responsabilidad al tomar la situación a su cargo; que el detenido no fue ingresado o registrado en los libros respectivos, por lo cual se ignoraba su identidad, no obstante dentro de la investigación se determinó que uno de los funcionarios, el día de los hechos, consultó a dicho detenido en la base de la asesoría técnica de Valparaíso, donde quedó registrada la consulta y el nombre de la persona o detenido y desde ese momento lograron saber la identidad del mismo.

B.- Imputación formulada a fojas 56, por el testigo Enrique Alfonso Alvarez González, quien recuerda que en el año 1983 estaba encargado de la oficina de partes de la Comisaría Judicial de Los Andes y que un día sábado concurrió al cuartel para finiquitar un trabajo administrativo y allí escuchó que había sido detenido un “delincuente habitual” (SIC) de nombre José Lazcano Campos, apodado “Guatón José”, lo que le llamó la atención por la circunstancia que anteriormente había tratado de ser detenido por el Inspector Bustos, pero que había logrado zafarse y darse a la fuga y en esa oportunidad había sido entregado por Carabineros precisamente a Bustos porque había estado de guardia.

C.- Declaración de fojas 57, de César Hernán Contreras Avello, quien señala que, se encontró con Fabio Lira en el centro de Santiago, a fines de marzo o principios de abril del año 1991, y éste le reconoció que un día sábado del año 1983 había llegado al cuartel de Los Andes, donde se desempeñaba como segundo jefe y había sido informado del fallecimiento de un detenido, precisamente se trataba del “Guatón José”, quien había sido interrogado por los funcionarios Bustos y Díaz.

D.- La imputación precisa y categórica de fojas 61 vuelta, de César Iván González Oyarzo, quien expresa que a mediados del año 1983 recuerda que un día domingo que no estaba de guardia, concurrió al cuartel a darse una vuelta, sin embargo, notó un ambiente extraño, ya que las puertas estaban muy cerradas y el personal se encontraba tenso y poco comunicativo, fue entonces que el segundo jefe de la unidad, Fabio Lira Guzmán, le señaló que había ocurrido un hecho extraño en la unidad y que era mejor que se retirara; que pasado unos tres o cuatro meses después, en circunstancias que se encontraban con Fabio Lira sirviéndose un trago, éste le contó lo que había ocurrido señalándole que como consecuencia de un interrogatorio a que había sido sometido el “Guatón José” por parte de los Inspectores Angel Bustos y Hernán Díaz, el detenido había fallecido en el Cuartel, y que para evitar que se conociera de su muerte, se había tomado la determinación de trasladar el cadáver hacia la zona norte, entre Pichicuy y Los Molles, y hacerlo desaparecer. Tales dichos fueron ratificados en orden de investigar a fojas 523, precisando que Fabio Lira, encontrándose con trago, y como una forma de desahogarse le comentó que el “Guatón Lazcano” había sido trasladado como detenido al cuartel por los Inspectores Bustos y Hernán Díaz, quienes lo habrían interrogado y que a raíz del método violento e inhumano utilizado falleció en las dependencias del cuartel; declaración que también es ratificada a fojas 646.

E.- Imputación de Hernán Enrique Catalán Apablaza, quien señala que a fs. 573, funcionario policial, que expresa que se decía que a Bustos se le había muerto una persona en el interrogatorio, que en esos días se criticaba a Bustos por su forma de interrogar solitaria, se le llamaba “Columbo”, era muy perseverante y tenía muy buenos resultados.

F.- Testimonio de Fabio Lira, actualmente fallecido, de fojas 239, quien expresa que después de ocurridos los hechos, se supo que la víctima correspondía a una persona que

anteriormente en un procedimiento había sido detenida por Bustos, pero que se había dado a la fuga, manteniéndose en sus dichos en el careo de fojas 24 vuelta.

En conclusión, existen presunciones que cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecida la participación dolosa del acusado Angel Nicanor Bustos Farías como autor del delito de secuestro con grave daño contemplado en el artículo 141 incisos primero y tercero del Código Penal, en su redacción vigente a la fecha de comisión de los hechos, situándose a este acusado con una participación activa en el tiempo y lugar de éstos y existiendo múltiples antecedentes que de manera invariable y conteste permiten tener por acreditado que Bustos estuvo a cargo del detenido, manteniéndolo encerrado en un calabozo de la unidad policial, contra su voluntad y sin que realmente se justificare tal encierro en la orden de aprehensión que tenía pendiente, interrogándolo y maltratándolo, produciéndose su muerte en dicho lugar y momento. Consecuentemente queda desvirtuada aquella parte de su declaración en la que niega haber interrogado y maltratado al detenido. A ello se suma que quedó desvanecida su defensa de no haber conocido al detenido, en circunstancias que quedó suficientemente demostrado que sí lo conocía, al punto que se le había zafado de un intento de una detención. Tampoco resulta creíble en modo alguno su alegación en orden a que habría llamado por teléfono al establecimiento de urgencia de Los Andes y que no le habrían contestado, en circunstancias que ello no se encuentra confirmado por ningún antecedente y porque resulta falto de veracidad y lógica, atendido que dada su condición de funcionario policial garante de la integridad física del detenido, bien pudo -en una ciudad como la de Los Andes, de distancias reducidas- trasladar al afectado de manera rápida e inmediata al servicio de urgencia, teniendo en consideración que se encontraban en el cuartel junto a otros funcionarios policiales y con disposición de vehículos institucionales. En fin, quedan así demostrados los elementos cognoscitivos y volitivos del tipo penal de secuestro calificado del artículo 141 inciso tercero del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos, siendo la participación del acusado Bustos, de autor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo normativo.

DECIMO TERCERO: Que a fojas 65 vuelta, presta declaración indagatoria el acusado Pedro Guillermo Leva Denegri, quien expone que ingresó a la Policía de

Investigaciones en 1974; que entre febrero de 1982 y enero de 1984 cumplió servicios en la Comisaría Judicial de Los Andes; que a mediados de 1983 no recuerda si fue un día sábado o domingo, en circunstancias que debía cumplir servicios de Retén en el cuartel, es decir reemplazar al oficial de guardia, llegó a cumplir la función alrededor del mediodía, en ese momento se le acercó el oficial de guardia, Inspector Angel Bustos, quien le manifestó o mejor dicho le dio a entender que había fallecido un detenido en los calabozos, nombrándoselo como “Guatón José”, delincuente a quien no conocía; se percató que habían movimiento extraños en el interior del cuartel y posteriormente no recuerda hora exacta, llegaron el jefe de unidad Felipe Hinojosa y el segundo jefe Fabio Lira, quienes se reunieron con Bustos para analizar lo ocurrido; se percató que discutían dos tipos de soluciones: una consistía en dar cuenta al Tribunal y la segunda, era ocultar la situación, haciendo desaparecer el cuerpo para evitar todos los problemas que el conocimiento del hecho pudiera ocasionar a la institución, cuyo aniversario se celebraba en fecha muy próxima; que la jefatura decidió adoptar este último camino, sin embargo, no tuvo conocimiento de la forma en que se iba a proceder al ocultamiento del cadáver; que terminando su turno, se retiró del cuartel aproximadamente a las 20:00 horas para realizar el segundo turno, se hizo cargo del servicio y se le ordenó que debía permanecer hasta que regresara el jefe de la unidad; que recuerda que Hinojosa, Lira y Bustos salieron del cuartel en una camioneta policial, modelo Blazer, pero no recuerda que otros funcionarios los acompañaban, tampoco se percató si habían puesto el cadáver en el vehículo, ya que no salió del recinto de la guardia y presume que el cuerpo debió haber sido sacado por el sector de entrada de vehículos; que no vio detenido ni el cadáver y no sabe qué destino tomó la camioneta; que en horas de la madrugada regresó el vehículo pero no formuló comentario; que es falso que haya colaborado en el traslado del cadáver desde los calabozos hasta la camioneta, pues no hizo abandono de la guardia. A fojas 704, ratifica su declaración y en cuanto a lo consultado con relación al Inspector Bustos si éste cuando le dio a entender que había fallecido un detenido en los calabozos, le mencionó los motivos, señala que nada le dijo; que con relación a quien tomó la decisión de ocultar el cuerpo a ese respecto debe indicar que supone que tienen que haber sido los jefes, Hinojosa y Lira, ya que ellos eran los que tomaban las decisiones; que no vio el cuerpo de José Renato Lazcano Campos y a esa persona no la conocía, y en cuanto al lugar donde estuvo oculto durante ese

día, lo ignora, ya que Hinojosa le prohibió moverse de la guardia; que nunca vio sacar el cuerpo de alguna persona, y cuando sacaron ese cuerpo no pasó por frente de la guardia, ya que lo hicieron por una puerta posterior que comunicaba con el lugar donde se guardaban los vehículos de la unidad; que recuerda a Hinojosa, Lira y Bustos como las personas que componían la comitiva para ocultar el cuerpo, en todo caso, sabe que hay más personas involucradas porque las vio declarando ante el Ministro y cuando estuvieron detenidos en el cuartel de la Policía de Investigaciones, como ser Díaz, Pantoja y Manríquez; que en cuanto a presiones y amenazas para no hablar sobre estos hechos, señala que el jefe de la unidad, Hinojosa, por lo menos a él le dijo que si comentaba algo sobre lo sucedido, le iba a sancionar con un sumario para despedirle.

DECIMO CUARTO: Que en relación al delito de inhumación ilegal, el acusado Pedro Leva Denegri, en síntesis, reconoce que el día en que ocurrieron los hechos se desempeñaba como oficial de guardia en el cuartel y que el Inspector Angel Bustos, le manifestó o le dio a entender que había fallecido un detenido en los calabozos, nombrándoselo como “Guatón José”, que cuando llegaron el jefe de unidad Felipe Hinojosa y el segundo jefe Fabio Lira, se percató que decidieron ocultar esa situación, haciendo desaparecer el cuerpo, sin embargo, no tuvo conocimiento de la forma en que se iba a proceder al ocultamiento del cadáver; ni tampoco supo cómo murió la víctima, empero se le ordenó que entretanto no regresara la comitiva policial que se transportaba en una camioneta policial, debía permanecer hasta que regresara.

Esta declaración, a juicio de este sentenciador, constituye una confesión judicial en orden a haber participado de una manera directa e inmediata en la ejecución del hecho típico de la inhumación ilegal. Ahora bien, su participación es la de autor y no la de cómplice, recalificando en este sentido el grado de participación por el que fue acusado. En efecto, si bien el acusado Leva limita su participación a haberse quedado en el cuartel policial, esperando como guardia a la comitiva de policías que se habían ido en el vehículo policial a desaparecer el cuerpo, lo cierto es que su actuación no se circunscribió a lo reconocido, puesto que además realizó hechos que formaron parte de la ejecución del delito de una manera inmediata y directa. Así, el coimputado Jorge Manríquez en su declaración de fojas 19 vuelta vio cuando los funcionarios Felipe Hinojosa, Fabio Lira, Pedro Leva,

Angel Bustos, Hernán Díaz y Luis Pantoja, trasladaron un bulto cubierto con mantas y frazadas desde los calabozos hasta la parte posterior de la camioneta institucional, lo que se une a lo dicho por el coimputado Angel Bustos que afirma en su declaración de fojas 13 que resulta ilógico que alguno de los funcionarios policiales pueda alegar desconocimiento de lo ocurrido. En consecuencia, la participación del acusado Leva en el delito de inhumación ilegal lo es en grado de autor, puesto que intervino en actos que formaron parte de la ejecución del hecho punible, en conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Que estos mismos antecedentes probatorios reseñados en el párrafo precedente, sumado a que el encausado Leva reconoce que escuchó que discutió lo ocurrido entre los funcionarios Hinojosa, Lira y Bustos y que éstos decidieron ocultar el cadáver, y que Angel Bustos expresa que Leva se encontraba en la unidad policial al tiempo en que se encontraba el detenido Lazcano, permiten tener por establecida la participación de Leva en el delito de secuestro con grave daño, pero recalificándola a la de encubridor. En efecto, no cabe duda que Leva no tuvo participación en el hecho como autor ni como cómplice, ya que éstos actúan con anterioridad o simultáneamente al hecho. En cambio, la actuación de este acusado se inició con posterioridad al mismo, es decir, después de consumado el delito de secuestro con grave daño, desde que a la víctima ya se le había mantenido encerrada de manera antijurídica, e incluso ya estaba fallecida, sin que exista una conexión del actuar del procesado Leva con la vulneración de la libertad de la víctima. Además cabe presumir del reconocimiento del acusado Leva que éste tuvo conocimiento del hecho delictivo del secuestro, en cuanto conoció que el detenido Lazcano estuvo a cargo del funcionario policial Bustos en el calabozo y que en ese lugar éste falleció. Como se ha expresado en la jurisprudencia, para que se configure el encubrimiento, no es necesario que se conozcan los detalles materiales relevantes, con tal que esté demostrado, como ha ocurrido en la especie, que el encubridor al menos se represente la posibilidad de la existencia del hecho punible. En concepto de este sentenciador, las actuaciones posteriores del encubridor, se adecuan a las modalidades 2ª y 3ª del artículo 17 del Código Penal, dado que sus actos estaban destinados a la ocultación de los rastros o huellas del delito y porque silenció el hecho en el que actuó Bustos al mantener encerrado al detenido en el calabozo y morir en aquel lugar, de manera que la acción desplegada por Leva tuvo por fin impedir el descubrimiento del

culpable, logrando que al menos Bustos, en su calidad de autor material del delito de secuestro se colocara al margen de la justicia.

DECIMO QUINTO: Que a fojas 19 vuelta, el acusado Jorge Eduardo Manríquez Fernández, declara que a mediados del año 1983, un día sábado o domingo, fecha exacta no recuerda, se encontraba de turno en el cuartel de Los Andes, hasta alrededor de las 13:00 horas; que se encontraba de guardia el Inspector Bustos y que esa mañana no recuerda nada anormal que haya ocurrido en el edificio, tampoco sabía que hubieran detenidos; a las 13:00 horas fue despachado por Fabio Lira, quien le ordena regresar, no recuerda si a las 15:00 o 17:00 horas; regresó y Lira le ordenó que los trasladara a un sector rural de Los Andes, llamado Lo Calvo, donde efectuaron un recorrido extenso junto a otro Detective cuyo nombre no recuerda; durante el recorrido en varias ocasiones Lira con el otro Detective se bajaban y miraban el lugar, conversando entre ellos, sin percatarse del tenor de su conversación, regresando al cuartel, alrededor de las 19:30 horas, donde Lira le ordenó regresar a las 21:00 o 22:00 horas; que no recuerda si antes o después de regresar, se le ordenó que fuera a un servicentro a llenar el estanque de la camioneta institucional, la que estacionó en los estacionamientos de la unidad; encontrándose junto a la camioneta, habían varios funcionarios, recuerda que estaban el jefe de la unidad Felipe Hinojosa, Fabio Lira, los Inspectores Pedro Leva y Angel Bustos, quien era oficial de guardia ese día, el Detective Hernán Díaz, y el auxiliar de servicio Luis Pantoja, a los cuales había visto antes transitar por el sector de los calabozos; que se le ordenó abrir la puerta posterior de la camioneta y luego se percató que entre todas las personas de la camioneta procedían a sacar desde uno de los calabozos un bulto, cubierto con mantas y frazadas de 2 metros de largo por alrededor de un metro y medio de ancho, el que fue depositado en la parte posterior del vehículo; se subieron al vehículo en la parte delantera el jefe Hinojosa y el Detective Díaz, mientras que en el asiento trasero lo hacían Bustos, Lira y el auxiliar Pantoja; que recibió instrucciones del jefe de la unidad de dirigirse hacia la carretera norte, siguieron viaje hasta cruzar la cuesta de El Melón; que no sabía cuál era el destino ni el objetivo del viaje ni que el bulto que habían cargado correspondía al cadáver de una persona; que viajaron alrededor de dos horas y media y en un momento Hinojosa le ordenó salirse del camino hacia la izquierda, tomaron otro camino y se le hizo detener, bajándose Hinojosa con otra persona que no recuerda, luego se subieron y continuaron llegando a un pueblito que no conoce, se

le ordenó dar la vuelta hasta llegar nuevamente a la ruta 5 norte, retomando hacia el norte, hicieron un trayecto no muy largo y el jefe le ordenó estacionar en el costado izquierdo de la berma del costado del mar, allí se bajaron todos los funcionarios incluido Hernán Díaz, pero en ese momento recibió órdenes, no recuerda si de Hinojosa o Lira de continuar hacia el norte en forma lenta y que regresara posteriormente, al mismo tiempo le ordenaron a Díaz que se subiera a la camioneta y que le acompañara; vio que entre los cuatro funcionarios que quedaron abajo sacaron el bulto y se dirigieron hacia el sector de la playa mientras salía del lugar, regresando posteriormente, pasado 30 o 60 minutos, para volver a Los Andes; que el Comisario Hinojosa les señaló que nadie debía hablar respecto a lo ocurrido; que no imaginaba que se había procedido a enterrar a un cadáver, nadie se lo dijo; que regresaron en la madrugada a Los Andes; que vino a enterarse del entierro clandestino cuando se le interrogó por el Departamento V de la Policía de Investigaciones y en el sumario administrativo; que no conoció al occiso, ni escuchó hablar de su nombre; que no puede precisar el lugar donde presumiblemente se enterró el cadáver, puesto que el recorrido lo hicieron de noche, estaba muy oscuro y había neblina. En declaración extrajudicial contenida en orden de investigar, a fojas 229, recuerda que en el año 1983, no recuerda fecha exacta, mientras se encontraba en su domicilio en San Esteban, un día, en horas de la noche, a eso de las 23:00 horas, recibió un llamado radial, en el cual se le ordenaba que debía dirigirse urgentemente a la Comisaría Judicial de Los Andes, presentándose con los oficiales que estaban en el lugar dentro de los cuales recuerda al Subcomisario Fabio Lira, Inspector Angel Bustos, Inspector Hernán Díaz y al auxiliar Luis Pantoja, no recordando si estaba el Comisario Felipe Hinojosa, de los cuales el Subcomisario Lira, le dijo que iban saliendo en la camioneta blanca fiscal, la cual tenía un pick up en su parte posterior, lugar donde subieron un bulto, enterándose posteriormente que correspondía a un cuerpo; que se subió a su lado el Subcomisario Fabio Lira, en la parte de atrás se sentaron los Inspectores Hernán Díaz, Angel Bustos y el auxiliar Luis Pantoja, así es que el señor Lira le indicó que iban rumbo hacia el norte; que tomó la ruta a Llay Llay hasta llegar a la ruta 5 norte, y avanzó más allá de La Ligua, hasta que Lira le dijo que se detuviera en la orilla, y descendieron todos los tripulantes a excepción de Díaz, quien se quedó sentado detrás, una vez que se bajaron, tomaron el bulto que estaba en la parte posterior y en ese momento Díaz le indicó que se devolvieran hacia el sur en la

camioneta, al avanzar unos kilómetros le dice que se devuelvan a buscar a los compañeros, así que se devolvió, hasta que lograron ubicarlos, y devolverlos a la Comisaría; que notaba que todos estaban muy asustados y nerviosos; que uno de ellos llevaba una pala, pero no recuerda quien, y le llamó la atención por la hora, el lugar y el bulto que trasladaban, pero no hizo ninguna pregunta para no involucrarse; que más o menos en el año 1989, debido a que unos funcionarios que habían dado de baja por mala conducta, informaron de la situación irregular; que se realizó un sumario administrativo en el cual fueron responsables, siendo dados de baja. A fojas 243 ratifica sus declaraciones, solo se dedicó a conducir, y a raíz del sumario administrativo se vino a enterar de los hechos ocurridos, pudiendo relacionar que el bulto que vio esa noche correspondía a la víctima.

DECIMO SEXTO: Que si bien el encausado Manríquez en el delito de inhumación ilegal, se sitúa en el tiempo y lugar de la comisión de los hechos, alega que desconocía que el bulto que se transportaba en el vehículo policial que conducía, correspondía a un cadáver y que tampoco lo supo cuando bajaron dicho bulto, aunque incluso vio que uno de los funcionarios policiales llevaba una pala. Empero, lo cierto es que el desconocimiento que alega se desvanece en virtud de los siguientes antecedentes probatorios:

A.- La imputación directa y precisa de Fabio Lira Guzmán, de fojas 231, actualmente fallecido, en declaración extrajudicial al señalar que durante el día en que ocurrieron los hechos, se realizaron varias diligencias previas, tales como la adquisición de cal, pala, chuzo, y otras cosas, menores, recordando que concurrieron en una camioneta fiscal de color blanco, junto a Hinojosa, Bustos, Pantoja, y el conductor del vehículo policial Jorge Manríquez y que también se dirigieron hacia el sector de Campos de Ahumada, con el objeto de verificar si el lugar reunía las condiciones para poder deshacerse del cadáver, sin embargo, apreciaron que transitaban muchas personas a caballo; que cuando ya llegaron al lugar en que sepultarían al cadáver de la víctima, instruyeron a Manríquez para que el auto estuviera en movimiento; que de vuelta a Los Andes, se detuvieron cerca de un puente en un río o canal, lugar donde se quemaron todas las pertenencias del detenido y las frazadas en las cuales se trasladó; que al llegar a la unidad policial acordaron que nunca más se hablaría de este episodio; en declaración judicial de

fojas 239, que vio a Pantoja, Díaz, Bustos y Manríquez subir el bulto a la parte de atrás de la camioneta, dichos que se mantienen en el careo de fojas 34.

B.- Declaración de fojas 58 vuelta, de Luis Eduardo Inostroza Padilla, que afirma que Manríquez, le manifestó que no conocía al “Guatón José” pero que en una noche de 1982, había sido citado por el jefe de la unidad en ese entonces y que en compañía de otros funcionarios habían trasladado un bulto, en una camioneta blazer, conducida por él hacia el norte del país y que en un lugar determinado se habían bajado los funcionarios a orilla de la carretera, quienes asimismo bajaron el bulto y que posteriormente pasó a recoger a dichos funcionarios, regresando a la unidad.

C.- Imputación precisa y directa del coimputado Angel Bustos Farías de fojas 13, quien asegura que entre todos, subieron el cadáver a la camioneta y que al llegar al lugar en que lo sepultarían, también entre todos lo bajaron, además destaca que todos sabían perfectamente lo que hacían.

En conclusión, existen presunciones que cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecida la participación dolosa del acusado Jorge Manríquez Fernández como autor del delito de inhumación ilegal previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, situándose a este acusado con una participación activa en el tiempo y lugar de éstos y existiendo múltiples antecedentes que de manera invariable y conteste permiten tener por acreditado que Manríquez realizó actuaciones con conocimiento que el “bulto” que transportaba en el vehículo policial que conducía era el correspondiente a un detenido que había fallecido en el interior del calabozo de la unidad policial, siendo estas actuaciones básicamente la de conducción de dicho vehículo y ayudar a cargar el cadáver. De este modo, se recalifica el grado de participación en este delito a la de autor y no de cómplice. Consecuentemente, no resulta creíble en modo alguno su alegación en orden a que no habría tenido conocimiento que transportaban un cadáver, en circunstancias que, los antecedentes probatorios dan cuenta de todo lo contrario, teniendo participación en calidad de autor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo normativo.

Que los mismos antecedentes probatorios reseñados en este considerando, permiten tener por establecida la participación de Manríquez en el delito de secuestro con grave daño, pero recalificándola a la de encubridor. En efecto, no cabe duda que Manríquez no tuvo participación en el hecho como autor ni como cómplice, ya que éstos actúan con anterioridad o simultáneamente al hecho. En cambio, la actuación de este acusado se inició con posterioridad al mismo, es decir, después de consumado el delito de secuestro con grave daño, desde que a la víctima ya se le había mantenido encerrada de manera antijurídica, e incluso ya estaba fallecida, sin que exista una conexión del actuar del procesado Manríquez con la vulneración de la libertad de la víctima. Además cabe presumir de los antecedentes probatorios referidos que éste tuvo conocimiento del hecho delictivo del secuestro, en cuanto conoció que el detenido Lazcano estuvo a cargo del funcionario policial Bustos en el calabozo y que en ese lugar éste falleció. A este respecto, cabe recordar que Bustos declaró que todos sabían lo que ocurría y Lira incluso señaló que de vuelta a Los Andes, quemaron las pertenencias de la víctima. Como se ha expresado en la jurisprudencia, para que se configure el encubrimiento, no es necesario que se conozcan los detalles materiales relevantes, con tal que esté demostrado, como ha ocurrido en la especie, que el encubridor al menos se represente la posibilidad de la existencia del hecho punible. En concepto de este sentenciador, las actuaciones posteriores del encubridor, se adecuan a las modalidades 2ª y 3ª del artículo 17 del Código Penal, dado que sus actos estaban destinados a la ocultación de los rastros o huellas del delito y porque silenció el hecho en el que actuó Bustos al mantener encerrado al detenido en el calabozo y morir en aquel lugar, de manera que la acción desplegada por Manríquez tuvo por fin impedir el descubrimiento del culpable, logrando que al menos Bustos, en su calidad de autor material del delito de secuestro se colocara al margen de la justicia.

DECIMO SEPTIMO: Que a fojas 16 vuelta, declara el acusado Luis Patricio Pantoja Canales, quien expresa que a mediados del año 1983, no recuerda con exactitud si un sábado o un domingo, llegó a la Comisaría a cumplir sus labores a las 8:00 horas, encontrándose de guardia el Inspector Angel Bustos; que enseguida, comenzó a hacer sus labores habituales de aseo y mantención del cuartel y alrededor de las 11:00 de la mañana, encontrándose lavando una loza, escuchó gritos provenientes de los calabozos, y en ese momento apareció el Inspector Bustos, quien le ordenó que fuera a buscar al jefe de la

unidad, Comisario Hinojosa, por lo que no puede señalar con precisión si los gritos que escuchó correspondían a un detenido o a Bustos, que le llamaba; en ese momento solo se encontraba Bustos y él en la unidad; se dirigió a la casa del jefe ubicada cerca del cuartel y le indicó que se le requería, respondiéndole que iba enseguida; al regresar al cuartel, Bustos le ordenó que fuera a buscar al segundo jefe de la unidad, Fabio Lira, pero no recuerda con exactitud, si Lira estaba ya en la unidad o venía llegando; se percató que se reunieron los tres policías, mientras él continuó con sus labores de aseo en otras dependencias del cuartel, sin saber lo que ocurría; que fue despachado a las 12:30 horas, recibiendo la orden del Subcomisario Lira de regresar a las 15:30 horas; que alrededor de las 19:30 horas vio que una camioneta Blazer de la institución regresaba al cuartel, conducida por el conductor Manríquez y llevando en su interior le parece que a Hinojosa y Lira; sin embargo, no recuerda si entró a la zona de estacionamiento; no recuerda si también venía en la camioneta el Inspector Hernán Díaz o si venía llegando al cuartel a esa hora; que más o menos a las 20:00 horas estaba en la sala de guardia y fue llamado por Lira ordenándole subir a la camioneta; que se reunió con Hinojosa, Lira, Bustos, Díaz y el conductor que ya estaba en su interior y le correspondió sentarse en el asiento trasero entre Lira y Bustos. Hace presente que en el asiento delantero, además del chofer, se instaló Hinojosa y al centro Hernán Díaz; que no sabía que en la parte posterior del vehículo llevaban un cadáver, puesto que nada de ello se le informó; que salieron a la carretera y pensó que iban a visitar a algún amigo a San Felipe, pero siguieron de largo y se empezó a preocupar porque le daba la impresión que algo irregular estaba ocurriendo; por ello empezó a preguntar a donde iban, pero nadie respondió, ya que todos viajaban callados; pasado San Felipe, no recuerda quien, le señaló que llevaban al “Guatón José”, que él sabía que era un delincuente habitual en Los Andes; que tampoco se percató que este sujeto estaba muerto, pero posteriormente, él introdujo la mano por entre los respaldos de los asientos y tocó una especie de bulto que iba en la parte posterior, percatándose que no había ningún movimiento, ahí recién se percató que llevaban una persona muerta; recuerda que pasaron la cuesta El Melón y siguieron hacia el Norte; que en esos momentos estaba psíquicamente muy alterado, porque al percatarse de la gravedad de la situación le dio mucho miedo; cuando llevaban viajando alrededor de una dos horas, el Jefe ordenó al conductor tomar otro camino por el cual viajaron una media hora, luego de lo cual hizo detener la camioneta

y se bajó solo Hinojosa, metiéndose en un potrero abierto donde luego de pisar el terreno, regresó diciendo que era duro; que se subió al vehículo nuevamente y siguieron por el mismo camino, llegando a los pocos minutos a un pueblito con casas muy bien mantenidas, luego regresaron por el mismo camino y retomaron la ruta hacia el norte alrededor de una hora, ya que la marcha era lenta, luego de lo cual Hinojosa hizo detener nuevamente el vehículo y estacionarlo en la berma de tierra del lado del camino que da hacia la playa, por lo cual tuvieron que cruzar la pista contraria; allí se les ordenó bajar del vehículo, permaneciendo solo en su interior el conductor y Hernán Díaz; que permanecieron un momento en ese lugar e Hinojosa se introdujo en dirección a la playa, pasando una cerca de alambre, luego de lo cual se devolvió señalando que el terreno era solo de arena y en ese momento abrieron la puerta posterior del vehículo y allí vio un bulto muy bien hecho que estaba envuelto en ponchos en cuyo interior se encontraba el cadáver del “Guatón José”, entre Hinojosa, Lira, Bustos y él, bajaron el cadáver y lo transportaron en dirección hacia la playa, pasando la cerca, caminando alrededor de 100 metros o un poco más, y se detuvieron en el lugar indicado por Hinojosa, dejaron el cadáver en el suelo; recuerda que se escuchaba el ruido del mar; alguien le pasó una pala y le ordenaron cavar en la arena; hace notar que Angel Bustos portaba una lámpara a gas con la cual alumbraba el lugar y la cubría con un poncho cuando se veía a lo lejos que se acercaba un vehículo por la carretera; empezó a cavar con gran dificultad, por cuanto la arena que sacaba volvía a caer al hoyo, hasta que logró hacer una fosa de unos dos metros de largo por unos 60 de ancho hasta que le llegó a la cintura; también le ayudaron a cavar Hinojosa y Lira; estuvieron en esta operación una media hora, luego de lo cual se le ordenó ir a la camioneta, y continuaron el viaje en dirección norte, siempre conducido por Manríquez, el que iba acompañado de Hernán Díaz, salió al camino y esperó a la camioneta que regresaba al lugar, la hizo detener indicándole al conductor que debía regresar en unos cinco minutos, se devolvió al lugar donde estaba los restantes miembros de la comitiva, pero estos ya venían en dirección a la carretera, por lo tanto no presenció el momento en que colocaron el cadáver en la fosa y lo cubrieron con arena, solo se acuerda que Lira venía con una rama tratando de borrar rastros; esperaron un rato detrás de la cerca de alambre, alrededor de dos minutos hasta que apareció de nuevo la camioneta a la que se subieron y regresaron a Los Andes, todos en silencio; que no puede precisar el lugar en que fue enterrado el cadáver, pero debe

corresponder un sitio ubicado entre la entrada de Papudo a Los Molles ya que posteriormente pudo establecer aunque no en forma fehaciente que el primer pueblo que entraron era Papudo; llegaron al cuartel de regreso en la madrugada del día siguiente y cuando estaban todos los que habían viajado en el sector de la guardia de la Comisaría, Hinojosa les ordenó que no debían hacer ningún comentario sobre el asunto, lo que él cumplió hasta que fue llamado a declarar por el Departamento V de la Policía de Investigaciones y por el Fiscal del Sumario Administrativo; que no supo que en la mañana el día de los hechos el delincuente apodado “Guatón José” se encontraba detenido en su interior; que tampoco se percató o se le informó cuando fue colocado el cadáver en la parte trasera de la camioneta. A fojas 241, ratifica declaración y aclara que ese día no vio al “Guatón José” vivo ni tampoco cuando lo subieron a la camioneta envuelto en mantas negras; que fue Hinojosa quien le dio la instrucción de cavar la fosa, pero en circunstancias que solo había avanzado un poco decidió no seguir adelante, señalándole que era difícil pues el terreno era bastante duro, alcanzando a cavar un metro; que cuando se salió, siguieron cavando Hinojosa y Lira y le ordenaron ir a buscar la camioneta razón por la cual no vio cuando tiraron el cuerpo a la fosa; y que no sabe en qué circunstancias murió José Lazcano.

DECIMO OCTAVO: Que en relación al delito de inhumación ilegal, el encausado Pantoja reconoce su participación en los hechos que configuran tal ilícito, siendo su confesión posible y verosímil, atendida sus circunstancias y condiciones personales, y concordante con las circunstancias y accidentes del hecho punible. Su participación lo es en calidad de autor del delito de inhumación ilegal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución del hecho de una manera inmediata y directa. En efecto, el procesado Pantoja reconoce que al llegar al lugar del entierro, junto a otros agentes policiales, ayudó a cargar el cadáver y cavó la sepultura.

Que en cuanto al delito de secuestro con grave daño, el encausado niega haber tomado conocimiento que Lazcano se encontraba mantenido encerrado en los calabozos por, al menos Angel Bustos, falleciendo en ese lugar. Empero, los elementos de cargo dan cuenta de su participación en este delito, pero recalificándola a la de encubridor. En efecto, no cabe duda que Pantoja no tuvo participación en el hecho como autor ni como cómplice,

ya que éstos actúan con anterioridad o simultáneamente al hecho. En cambio, la actuación de este acusado se inició con posterioridad al mismo, es decir, después de consumado el delito de secuestro con grave daño, desde que a la víctima ya se le había mantenido encerrada de manera antijurídica, e incluso ya estaba fallecida, sin que exista una conexión del actuar del procesado Pantoja con la vulneración de la libertad de la víctima. A este respecto, cabe recordar que Bustos declaró que fue Pantoja quien, luego de fallecido el detenido, fue a buscar a los dos jefes de la unidad, Hinojosa y Lira para informales de la situación y pedirles que concurrieran al cuartel, agregando que ese mismo día, cerca de las 21:00 horas el jefe Hinojosa, citó, entre otros funcionarios, a Luis Pantoja, para ir a enterrar al detenido; agregando que todos los que trasladaron el cadáver sabían de la gravedad del asunto y por ello decidieron permanecer en silencio, y Lira incluso señaló que de vuelta a Los Andes, quemaron las pertenencias de la víctima, lo que ratifica en careo de fojas 30. Ratifica lo expresado, lo declarado por el coimputado Jorge Manríquez en su declaración de fojas 19 vuelta vio cuando los funcionarios Felipe Hinojosa, Fabio Lira, Pedro Leva, Angel Bustos, Hernán Díaz y Luis Pantoja, trasladaron un bulto cubierto con mantas y frazadas desde los calabozos hasta la parte posterior de la camioneta institucional, no pudiendo darse credibilidad a Manríquez cuando en el careo de fojas 31, al expresar que no recuerda si Pantoja ayudó en el traslado del cadáver desde el calabozo, teniendo en cuenta el mérito de lo declarado primitivamente y los demás antecedentes inculpatorios. Como se ha expresado en la jurisprudencia, para que se configure el encubrimiento, no es necesario que se conozcan los detalles materiales relevantes, con tal que esté demostrado, como ha ocurrido en la especie, que el encubridor al menos se represente la posibilidad de la existencia del hecho punible. En concepto de este sentenciador, las actuaciones posteriores del encubridor, se adecuan a las modalidades 2ª y 3ª del artículo 17 del Código Penal, dado que sus actos estaban destinados a la ocultación de los rastros o huellas del delito y porque silenció el hecho en el que actuó Bustos al mantener encerrado al detenido en el calabozo y morir en aquel lugar, de manera que la acción desplegada por Pantoja tuvo por fin impedir el descubrimiento del culpable, logrando que al menos Bustos, en su calidad de autor material del delito de secuestro se colocara al margen de la justicia.

DECIMO NOVENO: Que a fojas 5 rola declaración del acusado Hernán Alejandro Díaz Carreño, quien señala que se encuentra en funciones en la Comisaría de Los Andes

desde el 15 de marzo de 1976; que en marzo último (1991) se habría recibido en el cuartel una carta que habría enviado el club de radio aficionados de Los Andes al cual pertenecía y en la cual se le señalaba algo así como que él era el culpable de la muerte de un tal “Guatón José”; que este anónimo estaba escrito en el sobre, pero él no lo vio, ya que fue entregado al Subcomisario Jefe; que posteriormente fue interrogado por el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, en relación a una muerte que se habría producido en el interior de los calabozos del cuartel y que correspondía al delincuente José Lazcano Campos, cuyo cadáver posteriormente habría sido trasladado a un sector costero, ubicado entre La Ligua y Los Vilos, donde habría sido sepultado clandestinamente; respecto a esta misma situación aclara que fue interrogado en un sumario administrativo seguido por la institución; que en cuanto a los hechos imputados, señala que en el curso de sus funciones policiales en Los Andes conoció a un delincuente habitual de nombre José Lazcano Campos, quien vivía en la parte posterior del callejón Penco en una Población Marginal ubicada en Los Andes, actualmente inexistente; que recuerda haberlo detenido en dos ocasiones por marihuana y una vez lo entrevistó por la pérdida de un animal; recuerda que a principios de junio de 1983, al parecer un domingo, encontrándose saliente de guardia, concurrió al cuartel, alrededor de las 19:00 a 20:00 horas y allí el jefe de la Comisaría, Felipe Hinojosa, le dio instrucciones de volver a las 23:00 horas, para salir a una ronda o diligencia; que en el breve momento que permaneció en la unidad no vio nada extraño y tampoco preguntó si habían detenidos, ni se asomó hacia el sector de los calabozos, sólo recuerda que estaba de guardia el Inspector Angel Bustos y parece que de ayudante se encontraba el Detective Pedro Leva y como refuerzo el Detective Hernán Catalán, sin poder precisar si habían más policías que los nombrados o algún auxiliar de servicio; que se retiró a su casa a comer y regreso al cuartel a la hora señalada por el jefe y al llegar encontró que estaban preparados en el interior de una camioneta marca Blazer color blanco, el Subcomisario Felipe Hinojosa, el Inspector Bustos, el segundo Jefe Subcomisario Fabio Lira, el auxiliar de servicio Luis Pantoja Canales, además, del conductor Jorge Manríquez Fernández; que él se subió al vehículo y se sentó en el asiento delantero, junto a la ventanilla del costado derecho y parece que al centro iba Hinojosa; que sin explicación alguna o instrucción y sin que él preguntara detalles, el jefe ordenó poner el vehículo en marcha y así salieron de Los Andes tomando la carretera 5 Norte; que durante el trayecto nadie habló ni él sabía cuál era

la misión específica que tenían, aunque pensaba que se trataba de alguna diligencia policial que iban a efectuar fuera de la jurisdicción, lo que no le extrañaba porque en algunas ocasiones operaban así; que tampoco le extrañó la circunstancia que viajara con ellos a una posible diligencia policial el auxiliar de servicio Pantoja, por cuanto, aunque no era reglamentario, a veces se le ordenaba que concurriera para apoyar una acción; que recuerda que pasaron por La Ligua, le parece que por fuera, y se detuvieron algunas ocasiones para orinar; que cuando llevaban más de una hora y media de camino, desde que salieron de Los Andes y antes de llegar a Los Vilos, Hinojosa ordenó detener el vehículo y le señaló al conductor que se dirigiera a un camino secundario de tierra ubicado al costado de la berma que da hacia el sector del mar, por lo cual el vehículo cruzó la calzada por la pista contraria, se introdujo al lugar señalado en un sector bajo, desde el cual él veía el paso de vehículos por la carretera, pero da la impresión que desde la carretera no se veía el lugar donde se encontraban; que en ese lugar los ocupantes del asiento trasero se bajaron por la puerta trasera; que él no se bajó del vehículo, pero el respaldo del asiento en que iba sentado lo echó hacia adelante y se agachó, pasando por su espalda uno de los ocupantes, le parece que Hinojosa, que iba sentado junto a él, a su izquierda; que él no vio lo que hicieron Hinojosa, Lira, Bustos y Pantoja cuando se bajaron, tampoco se percató si bajaron algún bulto, ya que no miró hacia atrás; que en ese momento, no recuerda si Hinojosa o Lira les ordenan que salieran del lugar y que regresaran en media hora; que continuaron por la huella del vehículo de tierra y retomaron a los pocos metros, nuevamente, la carretera y regresaron hacia el sur unos kilómetros y se detuvieron un rato a escuchar música; que posteriormente se devolvieron para tratar de ubicar el sitio donde habían dejado a las cuatro personas restantes, lo que les costó bastante, porque estaba todo muy oscuro e incluso cuando regresaban se pasaron del lugar, pero al regresar el auxiliar Pantoja les estaba haciendo señas en un costado de la vía; que el conductor detuvo allí la camioneta y las cuatro personas se subieron al vehículo ocupando los mismos lugares y en ese momento alguien dice que regresaran y que no había ocurrido nada con la diligencia; que regresaron a Los Andes sin hablar, llegando a esta ciudad alrededor de las 6 de la mañana, ya que recuerda que aún estaba oscuro y se retiró a su domicilio sin escuchar ningún comentario sobre el viaje; que no vio ningún cadáver o bulto, ni se fijó en el momento de detenerse el vehículo si se sacó algún objeto del interior, ya que no miró a la parte posterior cuando se

bajaron los otros funcionarios; que a raíz del sumario administrativo se enteró que el día en que efectuaron el viaje relatado había sido entregado a la Policía de Investigaciones en calidad de detenido José Lazcano Campos, por Carabineros; sin embargo, él no lo vio en ningún momento, porque ese día no estaba de guardia, solo concurrió, como dijo, al Cuartel entre las 19:00 y las 20:00 horas y no se percató de nada extraño y por lo tanto no es efectivo que lo haya golpeado junto a Angel Bustos como algunas personas le achacaban y menos que haya participado en hechos que le ocasionaran la muerte; reconoce que ahora atando cabos, es muy posible que el viaje que narró haya sido con el objeto de sepultar el cadáver del nombrado Lazcano, pero insiste en que no tuvo conocimiento en su oportunidad de ello, puesto que nada se le informó e ignora el tenor de las conversaciones que haya tenido Hinojosa con el resto de la comitiva antes de salir del cuartel; reconoce que le resultó bastante extraño el viaje realizado, ya que no se les dio instrucción respecto a la presunta diligencia policial, pero él no formuló ninguna pregunta ni requirió información por cuanto era tan solo un Detective y viajó al mando de la jefatura; que los rumores que se han escuchado acerca de su inculpación considera que se trata de actitudes revanchistas de los Subcomisarios Miguel Yáñez, Enrique Alvarez y César González, que fueron funcionarios de la Comisaría de Los Andes, actualmente exonerados de la Policía por participación en irregularidades relativas al tráfico de estupefacientes, lo que a él le correspondió informar a sus superiores en su calidad de coordinador de narcóticos. A fojas 156, declara que la hora de salida fue entre 21:00 y 22:00 horas, en cuanto a la hora de llegada pueden ser cerca de dos horas de viaje al lugar de la inhumación o supuesto lugar de la inhumación; que en cuanto al tiempo total de viaje de regreso a Los Andes llegaron cerca de las 07:00 horas; que en cuanto al tiempo en que se alejaron del lugar, aproximadamente una hora y media a dos; que no vio faros; que en cuanto al tiempo de espera fue entre una hora y media a dos horas. A fojas 237, reitera que cuando se detuvo la camioneta, el jefe le ordena al conductor del vehículo que vuelva en dos horas y media aproximadamente y le ordena que se mantenga en el vehículo, el conductor volvió a conducir hacia el sur. Recuerda que había mucha neblina porque estaban en el sector de la costa y producto de la poca visibilidad les costó tomar el camino de regreso; y que él no sabía en ese momento a que iban y si llevaban algo o a alguien en el vehículo.

VIGESIMO: Que en relación a delito de inhumación ilegal, si bien el encausado Hernán Díaz Carreño se sitúa en el tiempo y en el lugar de la comisión de los hechos, niega su participación, asegurando que desconocía lo ocurrido en el cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile y que tampoco sabía que lo transportado en el vehículo policial correspondía al cadáver de un detenido, negativa que resulta desvirtuada con los siguientes antecedentes probatorios:

A.- Imputación directa y precisa efectuada a fojas 239 por Fabio Barcelo Lira, actualmente fallecido, quien ratifica su declaración extrajudicial de fojas 231, señalando que, luego que lo fue a buscar Pantoja, llegó hasta la unidad policial, lugar en el que se encontraban el Comisario Felipe Hinojosa Sánchez, el Inspector Angel Bustos Farías, Detective Hernán Díaz Carreño y no recuerda quien más, con quienes se reunieron para ver qué era lo que se haría con el cadáver; que se realizaron varias diligencias, tales como adquisición de cal, pala, chuzo y otras cosas, menores, recordando que concurrieron en una camioneta fiscal, junto a Hinojosa, Bustos, Pantoja, el conductor del vehículo policial era Manríquez y no recuerda si también iba Díaz, empero, hace presente que fue Díaz quien se consiguió el saco con cal con una persona conocida como nano Guerra; además reconoce que por orden de Hinojosa, cuando ya regresaban a Los Andes, se detuvieron cerca de un puente en un río o canal muy caudaloso, lugar en el que por orden de Hinojosa se quemaron todas las pertenencias del detenido y las frazadas en las cuales se trasladó. En la declaración de fojas 239, indica que vio a Pantoja, Díaz, Bustos y Manríquez, subiendo un bulto en la parte de atrás de la camioneta, dichos que mantiene en el careo de fojas 27 vuelta.

B.- Lo expresado por Angel Bustos, quien asegura, que ninguno de los funcionarios que se encontraban en el interior del vehículo podría desconocer lo que había ocurrido, dichos que mantiene en careo de fojas 25 vuelta, señalando que Díaz, Hinojosa, Lira y el auxiliar Pantoja, trasladaron primero el cadáver desde el calabozo a la camioneta y después formó parte de la tripulación del vehículo, sabía perfectamente lo que había ocurrido y participó en el traslado y ocultamiento del cadáver.

C.- Lo declarado por el coimputado Jorge Manríquez en su declaración de fojas 19 vuelta vio cuando los funcionarios Felipe Hinojosa, Fabio Lira, Pedro Leva, Angel Bustos, Hernán Díaz y Luis Pantoja, trasladaron un bulto cubierto con mantas y frazadas desde los

calabozos hasta la parte posterior de la camioneta institucional, dichos que se mantienen en el careo de fojas 32.

En conclusión, existen presunciones que cumpliendo con los requisitos contemplados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener por establecida la participación dolosa del acusado Hernán Díaz Carreño como autor del delito de inhumación ilegal previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, situándose a este acusado con una participación activa en el tiempo y lugar de éstos y existiendo múltiples antecedentes que de manera invariable y conteste permiten tener por acreditado que Díaz realizó actuaciones con conocimiento que lo que se transportaba en el vehículo policial correspondía a un detenido que había fallecido en el interior del calabozo de la unidad policial, siendo estas actuaciones básicamente la de ayudar a cargar el cadáver y además actuar como vigilante dentro del vehículo mientras otros enterraban el cadáver de la víctima. Consecuentemente, no resulta creíble en modo alguno su alegación en orden a que no habría tenido conocimiento que transportaban un cadáver, en circunstancias que, los antecedentes probatorios dan cuenta de todo lo contrario, teniendo participación en calidad de autor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del mismo cuerpo normativo.

En relación al delito de secuestro con grave daño, a juicio de este sentenciador, para tenerlo como autor sólo obra el testimonio de fojas 61 vuelta, de César Iván González Oyarzo, quien expresa que Fabio Lira Guzmán, le contó lo que había ocurrido señalándole que como consecuencia de un interrogatorio a que había sido sometido el “Guatón José” por parte de los Inspectores Angel Bustos y Hernán Díaz, el detenido había fallecido en el Cuartel, sin embargo, al leer atentamente la declaración judicial del mismo Fabio Lira Guzmán, actualmente fallecido, aparece que esa afirmación no es respaldada. De ahí, que sólo surgen presunciones que reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para tenerlo como encubridor del delito de secuestro con grave daño. En efecto, no cabe duda que Díaz participó con posterioridad a la consumación del delito de secuestro con grave daño. A este respecto, cabe reiterar lo dicho por Fabio Lira, quien afirma que ya de vuelta a Los Andes, quemaron las pertenencias del fallecido y lo expresado por Bustos, quien asegura, que ninguno de los funcionarios que se encontraban

en el interior del vehículo podría desconocer lo que había ocurrido. Ratifica lo expresado, lo declarado por el coimputado Jorge Manríquez en su declaración de fojas 19 vuelta vio cuando los funcionarios Felipe Hinojosa, Fabio Lira, Pedro Leva, Angel Bustos, Hernán Díaz y Luis Pantoja, trasladaron un bulto cubierto con mantas y frazadas desde los calabozos hasta la parte posterior de la camioneta institucional. Como se ha expresado en la jurisprudencia, para que se configure el encubrimiento, no es necesario que se conozcan los detalles materiales relevantes, con tal que esté demostrado, como ha ocurrido en la especie, que el encubridor al menos se represente la posibilidad de la existencia del hecho punible. En concepto de este sentenciador, las actuaciones posteriores del encubridor, se adecuan a las modalidades 2ª y 3ª del artículo 17 del Código Penal, dado que sus actos estaban destinados a la ocultación de los rastros o huellas del delito y porque silenció el hecho en el que actuó Bustos al mantener encerrado al detenido en el calabozo y morir en aquel lugar, de manera que la acción desplegada por Díaz tuvo por fin impedir el descubrimiento del culpable, logrando que al menos Bustos, en su calidad de autor material del delito de secuestro se colocara al margen de la justicia.

EN CUANTO A LAS CONTESTACIONES DE LA ACUSACION FISCAL Y PARTICULAR

VIGESIMO PRIMERO: Que a fojas 929, 940, 946, 952 y 958 y siguientes, el abogado don Jorge Balmaceda Morales, por sus representados Hernán Díaz Carreño, Pedro Leva Denegri, Angel Nicanor Bustos Farías, Jorge Manríquez Fernández y Luis Pantoja Canales, respectivamente, contesta la acusación de oficio y la acusación particular, argumentando, en síntesis, las siguiente defensas:

1.- Luego de reproducir en cada caso lo declarado por sus representados, afirma que José Lazcano Campos en 1983, era conocido como un delincuente habitual de Los Andes, por lo cual existían diversas órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de robo y hurto, debido a esto último, Carabineros de Chile, detiene a la víctima, reproduciendo lo dicho a fojas 95 por Waldo Valverde Varela, quedando de manifiesto que tenía órdenes de aprehensión pendientes en causas N° 40.933 y 42.338 ambas del Juzgado del Crimen de Los Andes, por el delito de hurto. Argumenta que de este modo no se cumple una de las

premisas del delito de secuestro, pues está acreditado que si existían diversas órdenes de detención pendientes en contra de la víctima.

2.- Sostiene que los elementos probatorios son insuficientes para incriminarlos en el delito de secuestro. Tratándose de Pedro Leva, particulariza que no tuvo participación en los delitos de secuestro con grave daño e inhumación ilegal, pues el jefe de unidad le ordenó relevar la guardia del Inspector Bustos, por lo que solo se dedicó a cumplir lo ordenado. Respecto de Jorge Manríquez, particulariza que como consta en su declaración no tenía conocimiento de la existencia de este detenido en los calabozos del cuartel y su fortuito fallecimiento, ya que sus funciones se relacionaban estrictamente con la conducción de los vehículos institucionales.

3.- Respecto al delito de inhumación ilegal, asegura que consta de diversas declaraciones de los acusados que todos siguieron las órdenes del Comisario Felipe Hinojosa, a pesar de insistir que los hechos fueran informados al Juzgado del Crimen de Los Andes, pues la muerte del detenido había sido fortuita, sin existencia de tormentos u otro maltrato físico que le hubiera causado la muerte. Señala que sin embargo, sin razón alguna o por miedo a la destitución, debido a que el Comisario estaba a cargo de todo el cuartel efectuó la orden de sepultar ilegalmente a José Lazcano Campos, por lo que sus representados no tuvieron otra opción que acatar; por consiguiente, en este caso debe aplicarse el artículo 10 N° 10 del Código Penal, que señala: “El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Asevera que sus representados cumplieron las órdenes de sus superiores.

4.- En la parte petitoria también solicita que se declare la prescripción de la acción penal y la correspondiente extinción de la responsabilidad criminal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 93, 94 y 95 y demás pertinentes todos del Código Penal.

5.- En cuanto a la acusación particular, agrega que no hay prueba que sus representados hayan ejercido tormentos sobre la persona de José Lazcano Campos, además tales acusaciones tienden a establecer que el delito tipificado como lesa humanidad, cuando a todas luces no se cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.357.

6.- En subsidio, pide que se recalifique la participación de Angel Bustos como cómplice del delito de secuestro con grave daño e inhumación ilegal, ya que su actuar bajo ningún respecto puede encuadrarse dentro de alguna de las hipótesis de autoría que señala el artículo 15 del Código Penal. Tratándose de Pedro Leva, Hernán Díaz, Jorge Manríquez, solicita que se recalifique su participación como encubridor del delito de secuestro con grave daño e inhumación ilegal. En cuanto Luis Pantoja pide que se recalifique su participación en el delito de inhumación ilegal a la de cómplice.

7.- En subsidio, pide aplicar en la sentencia una pena no superior a los cinco años de presidio o reclusión, por favorecerle una atenuante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, esto es, la media prescripción o prescripción gradual, por haber transcurrido más de la mitad del tiempo de prescripción.

8.- Alega que les favorecen además las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial que ha prestado para el esclarecimiento de los hechos.

VIGESIMO SEGUNDO: Que en cuanto a la solicitud fundada en que los delitos por los cuales fueron acusados los encausados no tienen el carácter de crímenes de lesa humanidad y que por tanto, haría procedente la declaración de la prescripción de la acción penal, cabe, por razones de economía procesal, tener por reproducido lo expresado en los considerandos noveno y décimo de este fallo, por lo que se desestimaré la alegación.

VIGESIMO TERCERO: Que en lo concerniente a la solicitud de absolución fundada en que no concurre el tipo penal del delito de secuestro dado que pesaban sobre la víctima ordenes de aprehensión pendientes, de modo que la detención que le afectó se encontraba legitimada por el Derecho, cabe por reproducido el fundamento tercero de esta sentencia, en el que se dan por establecidos todos los elementos del delito de secuestro con grave daño, por lo que se rechazará esta petición.

VIGESIMO CUARTO: Que en cuanto a la alegación basada en la insuficiencia de elementos incriminatorios para atribuir participación a los encausados en el delito de secuestro con grave daño, para evitar repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos el considerando duodécimo respecto del encausado Angel Bustos Farías que reflexiona

acerca de su calidad de autor y los considerandos décimo cuarto, décimo sexto, décimo octavo y vigésimo en cuanto a los acusados Pedro Leva Denegri, Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales y Hernán Díaz Carreño, respectivamente, que razonan acerca de la participación en calidad de encubridor en dicho ilícito.

VIGESIMO QUINTO: Que en cuanto a la solicitud que se considere a favor de los acusados la eximente de responsabilidad penal contemplada en el artículo 10 N° 10 del Código Penal, que dispone que están exentos de responsabilidad criminal el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, en este categoría de justificantes, para que esta pueda ser estimada concurrente es necesario que la orden otorgada por el superior haya sido legítima, sin embargo, en estos autos se encuentra plenamente demostrado que la actuación que culminó con la inhumación de la víctima se realizó al margen de la legalidad, por lo que esta debe ser desestimada.

VIGESIMO SEXTO: Que en lo concerniente a la defensa de la acusación particular, que pretende una condena por el delito de aplicación de tormentos, debe estarse a lo motivado en el basamento sexto, el que se tiene por reproducido.

VIGESIMO SEPTIMO: Que en relación a la petición en orden a que se recalifique el grado de participación de los encausados, por razones de economía procesal, deberá estarse a lo razonado en el considerando duodécimo respecto del encausado Angel Bustos Farías y los fundamentos décimo cuarto, décimo sexto, décimo octavo y vigésimo en cuanto a los acusados Pedro Leva Denegri, Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales y Hernán Díaz Carreño, respectivamente.

VIGESIMO OCTAVO: Que en cuanto a la petición correspondiente a la aplicación de la denominada media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal, cabe reiterar que el delito de que se trata constituye un crimen de lesa humanidad, lo que determina su imprescriptibilidad, por ende, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza a la gradual, porque no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

EN CUANTO A LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL.-

VIGESIMO NOVENO: Que la defensa de los acusados solicitó que se consideren a su favor las circunstancias atenuantes contempladas en los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal.

Que en relación a los encausados Angel Bustos Farías, Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales y Hernán Díaz Carreño, les favorece la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior, acreditada con el mérito de los extractos de filiación y antecedentes agregados a fojas 435, 479, 438 y 432, respectivamente. Si bien el encausado Manríquez registra una condena por la falta contemplada en el artículo 496 N° 17 del Código Penal, la condena es de 18 de octubre de 2018 de modo que siendo posterior a la fecha de los hechos investigados en estos autos, no es posible que le afecte.

No se acepta la petición respecto del encausado Pedro Leva Denegri quien en su extracto de fojas 452 aparece que fue condenado por el Segundo Juzgado del Crimen de La Serena, a la pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de apremios ilegítimos. Conforme al documento guardado en custodia, aparece que la sentencia fue dictada el 2 de mayo de 1979.

TRIGESIMO: Que en lo referido a la solicitud de reconocimiento de la minorante contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, cabe tener en cuenta que, amén de no encontrarse fundamentada por la defensa, no se aprecia por este juzgador como los acusados colaboraron sustancialmente con el esclarecimiento de los hechos, considerando además la circunstancia de que si bien algunos de los acusados reconocieron el hecho de la inhumación, lo hicieron en fechas muy posteriores a aquel hecho, que claramente no fueron útiles en términos sustanciales, de suerte que sólo lo hicieron cuando ya existían suficientes antecedentes tanto en la investigación administrativa que se realizó por la Policía de Investigaciones como en esta investigación penal, no pudiendo tampoco pasar por alto que no se observó ningún esfuerzo de los encausados por aclarar el lugar en que fue enterrado el cadáver de la víctima, más todavía si de los elementos probatorios aparece que algunos

funcionarios tiempo después retornaron a dicho lugar para verificar las condiciones en que éste se encontraba.

TRIGESIMO PRIMERO: Que en el escrito de fojas Fs. 779, el abogado Francisco Jara Bustos, por la parte querellante María Alejandra Lazcano Campos, solicita que se consideren como concurrentes las siguientes circunstancias agravantes de responsabilidad criminal respecto de todos los acusados, en relación al delito de secuestro calificado:

1.- La del artículo 12 N° 8 del Código Penal, esto es, “Prevalerse del carácter público que tenga el culpable”, citando a este respecto al profesor Enrique Cury; y

2.- La del artículo 12 N° 11 del Código Penal, a saber, la comisión efectiva de delitos por personas armadas y auxiliándose mutuamente con el fin de asegurar o proporcionar la impunidad, lo que no forma parte del tipo de secuestro calificado.

A su turno, a fojas 810, la abogada Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicita que se consideren en perjuicio de los acusados las siguientes circunstancias:

1) La del N° 6 del artículo 12 del Código Penal, esto es, abusar el delincuente de la superioridad de sus fuerzas o de las armas, dado que la víctima se encontraba en una situación de inferioridad respecto de los autores del delito, derivada de la fuerza, número y armas con que actuaron, considerando además que el delito fue ejecutado por personas que actuaron en grupo;

2) La del N° 8 del artículo 12 del Código Penal, esto es: “Prevalecerse del carácter público que tenga el culpable”, citando a este respecto al autor Enrique Cury Urzúa. Señala que consta en autos que los inculpados eran todos parte de la Policía de investigaciones de Chile y en consecuencia todos ellos eran funcionarios públicos, y fue en abuso de esta calidad que los hechores ejecutaron los delitos, valiéndose de su calidad de agentes estatales para asegurarse la impunidad, aprovechándose asimismo de las estructura de seguridad del Estado y del mismo régimen militar que aún vivía en la época;

3) La del N° 11 del artículo 12 del Código Penal, es decir, “Ejecutarlo con el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad”, toda vez que la víctima fue recluida, custodiada e inhumada ilegalmente por varios agentes, de modo que la superioridad de número les proporcionó a los autores una total impunidad en su proceder, quienes se encontraban armados al cometer el delito.

TRIGESIMO SEGUNDO: Que en cuanto a la modificatorias de responsabilidad penal contempladas en el artículo 12 N° 6 y N° 8 del Código Penal, cabe considerar que no existen antecedentes probatorios para considerar que los agentes policiales pusieron la función pública al servicio de sus propios fines y particulares fines, esto es, que se hayan aprovechado del carácter público para ejecutar los delitos. Como ha señalado la doctrina no basta con invocar la investidura pública, sino que además debe quedar demostrada una característica personal del agente, en orden al sello abusivo de que se aprovechado para cometer el ilícito, lo que no ha ocurrido en la especie, por lo que se desestimará esta alegación.

TRIGESIMO TERCERO: Que en cuanto a la solicitud de considerar la agravante contemplada en el N° 11 del artículo 12 del Código Penal, es decir, “Ejecutarlo con el auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad”, no es posible acceder a tal petición, dado que no se encuentra acreditada ninguna de las dos hipótesis que contiene la disposición. En efecto, no hay prueba que hayan actuado terceros que hayan proporcionado la impunidad a los agentes acusados ni que estos últimos hayan actuado con la ayuda de gente armada.

EN CUANTO A LA DETERMINACION DE LAS PENAS.-

TRIGESIMO CUARTO: Que el abogado don Francisco Jara Bustos, en representación de la parte querellante María Alejandra Lazcano Campos, pidió en su escrito de fojas 779, que debe tenerse muy en consideración conforme al artículo 69 del Código Penal, los parámetros definidos para determinar la extensión del mal causado al momento de fijar la sanción penal, dado que se trata de delitos consumados de secuestro calificado, de aplicación de tormentos e inhumación ilegal. Solicita que en relación a los acusados Angel Nicanor Bustos Farías, Hernán Alejandro Díaz Carreño, Luis Patricio Pantoja

Canales y Fabio Barceló Lira Guzmán, quienes han sido acusados en calidad de autores de los delitos consumados de secuestro calificado e inhumación ilegal y de aplicación de tormentos, que además son constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, en la persona de José Renato Lazcano Campos, con la concurrencia de las circunstancias modificatorias del artículo 12 N° 8 y 11 del Código Penal y atendido lo dispuesto en los artículos 68 inciso primero, 69 y 74 todos del Código Penal, se condene a cada uno de ellos, a la pena de presidio perpetuo, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos y a la pena de 540 días de reclusión menos en su grado mínimo, más las sanciones accesorias legales y el pago de las costas de la causa. Y en relación a los acusados Jorge Eduardo Manríquez Fernández y Pedro Guillermo Leva Denegri, solicita que se les condene a cada uno de ellos a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado, a la pena de tres años de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos y a la pena de 60 días de prisión, más las accesorias legales y el pago de las costas de la causa.

A su turno, en el escrito de fojas 810, la abogada doña Lenimar Ortega Valenzuela, en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pide tener presente lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, teniendo en cuenta que los ilícitos investigados deben ser considerados un crimen contra la humanidad y dado que además la víctima de autos fue considerada como víctima de violación a los derechos humanos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Pide que la pena que se imponga a Angel Nicanor Bustos Farías, Hernán Alejandro Díaz Carreño, Luis Patricio Pantoja Canales y Fabio Barceló Lira Guzmán debe ser presidio perpetuo en su calidad de autores del delito de secuestro calificado y de tres años de reclusión menor en su grado medio por el delito de inhumación ilegal y en cuanto a los cómplices Jorge Eduardo Manríquez Fernández y Pedro Guillermo Leva Denegri, una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo en su calidad de cómplices del delito de secuestro calificado y de 540 días de reclusión menor en su grado mínimo por el delito de inhumación ilegal.

TRIGESIMO QUINTO: Que los acusados Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales, Hernán Díaz Carreño y Pedro Leva Denegri, serán sancionados como autores del delito de inhumación ilegal, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código punitivo, que establece una pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez sueldos vitales”, actualmente seis a diez unidades tributarias mensuales. Además, dichos encausados serán castigados como encubridores del delito de secuestro con grave daño, previsto y sancionado en el artículo 141 inciso primero y cuarto del Código Penal, vigente al tiempo de comisión de los hechos, el que tenía contemplado una pena de presidio mayor en su grado medio a grado máximo y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 52 del citado Código, atendido su grado de participación, la pena se rebajará en dos grados. Asimismo, se tendrá presente que a los tres primeros les favorece la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del mismo texto normativo, sin perjudicarle agravantes. Por aplicación de lo mandatado en el artículo 67 inciso segundo del Código Penal, la pena que se impondrá a Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales y Hernán Díaz Carreño, como autores del delito de inhumación ilegal se hará en su minimum, en tanto, tratándose de Pedro Leva Denegri, se podrá recorrer toda su extensión, de acuerdo a lo señalado en el inciso primero de la misma disposición. En cuanto los tres primeros encausados han resultado encubridores del delito de secuestro con grave daño, la pena no se podrá imponer en la parte más alta. En lo concerniente a Leva, se podrá recorrer toda su extensión.

En cuanto al acusado Angel Bustos Farías, ha resultado sancionado como autor del delito de secuestro con grave daño y de inhumación ilegal, previstos y sancionados en las normas citadas en el párrafo precedente, favoreciéndole una circunstancia atenuante sin perjudicarle agravantes. Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 67 inciso segundo del Código Penal, respecto al delito de inhumación ilegal, la pena deberá imponerse en su minimum y en lo relativo al delito de secuestro con grave daño, conforme lo permite el inciso 2° del artículo 68 del Código del ramo, no se aplicará el grado máximo de la pena.

Respecto de las penalidades precisas, este tribunal lo hará en el mínimo, por no existir otros factores adicionales para tener en consideración, aparte de los recogidos para el establecimiento del ilícito y de la participación.

EN CUANTO A LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 18.216

TRIGESIMO SEXTO: Que en relación al encausado Angel Bustos Farías, no se le otorgarán ningunas de las medidas alternativa o actuales penas sustitutivas de la Ley 18.216, atendida la extensión de la pena impuesta.

Que en cuanto a los acusados Jorge Manríquez Fernández, Luis Pantoja Canales, Hernán Díaz Carreño se les otorgará la pena sustitutiva de libertad vigilada la Ley 18.216, por reunir los requisitos legales, teniendo en cuenta los informes emanados de Gendarmería de Chile a fojas 1033 vuelta, 1000 y 995, respectivamente.

Que en relación al encausado Pedro Guillermo Leva Denegri, no podrá ser beneficiado con dicha pena sustitutiva, atendido a que fue condenado anteriormente como autor del delito de apremios ilegítimos, a una pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo, no pudiendo beneficiarse con la norma del artículo 15 b) N° 2 del actual texto de la Ley N° 18.216 atendido que no transcurrió el tiempo exigido por dicha disposición, entre la fecha de cumplimiento de la condena referida y la fecha de perpetración de los delitos por los cuales se le sancionará.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

TRIGESIMO SEPTIMO: Que en el primer otrosí del escrito de fojas 779, el abogado Francisco Jara Bustos, en representación convencional de doña María Alejandra Lazcano Campos, soltera, dueña de casa, ambos con domicilio en Pasaje Ross N° 149, oficina 804, Valparaíso, deduce demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del Fisco de Chile persona jurídica de derecho público, representado legalmente en su calidad de Procurador Fiscal de Valparaíso, por don Michael Wilkendorf Simpfendorfer, abogado, ambos domiciliados en calle Prat 772, piso 2, Valparaíso. Expresa que desde la época de su detención y desde que se perdiera el rastro de José Renato Lazcano Campos, su hermana María Alejandra ha estado buscándolo, intentando averiguar la verdad de lo ocurrido con su hermano, quien ni siquiera tenía militancia política alguna, ha realizado denuncias, prestado declaraciones, testificado ante distintos organismos de derechos humanos. Indica que esta situación la ha tenido preocupada toda su vida, afectando su proyecto de vida, generándole tremenda incertidumbre y afectación psicológica, Refiere que los hechos descritos

configuran graves violaciones a los derechos humanos, consistentes en crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre los que se cuenta la desaparición forzada (secuestro calificado), la práctica de la tortura, y la inhumación ilegal del hermano de la víctima. Refiere las normas de Derecho Internacional que se han vulnerado y asegura que ha surgido una obligación de reparar desde el punto de vista de esta normativa, al violarse una obligación internacional y siendo el autor de la violación agentes del Estado. También afirma que surgió la obligación de reparar en el derecho chileno, sobre la base de lo establecido en la Constitución Política de la República, calificando a la responsabilidad extracontractual del Estado como de derecho público. Menciona que el Estado de Chile, mutuo propio, en cumplimiento de obligaciones internacionales ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa a través del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde queda constancia de las graves violaciones a los derechos humanos y la represión sufrida por miles de compatriotas, señala que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación reconoce a José Renato Lazcano Campos como víctima de la práctica institucional de la desaparición forzada. Luego de fundamentar la extensión del daño moral desde el punto de vista normativo, pide que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$ 200.000.000 para la demandante a título de indemnización por el daño moral que se le ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en su hermano José Lazcano Campos, más reajustes e intereses o la suma que el tribunal determine, con costas. También señala que la acción destinada a obtener la indemnización de perjuicios derivada de delitos de lesa humanidad es imprescriptible al igual que la acción penal. Termina señalando que concurren todos los requisitos para indemnizar, esto es, a) existencia de una acción u omisión de un órgano del Estado; b) existencia de un daño; c) nexo causal; y d) no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

TRIGESIMO OCTAVO: Que a fojas 884, Rodrigo Herrera Cienfuegos, Abogado Procurador Fiscal Subrogante de Valparaíso, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en calle Prat N° 772, 2° piso, Valparaíso contesta la demanda civil en virtud de los siguientes argumentos:

1) Opone excepción de reparación satisfactiva, haciendo mención a la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas anexas, señalando que se han establecido diversos mecanismos los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. Señala que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Explica que la Ley N° 19.123 estableció una pensión vitalicia para el cónyuge sobreviviente, la madre del causante o el padre de éste cuando aquella faltare o renunciare, las madre de los hijos de filiación no matrimonial del causante o el padre de éstos cuando aquella fuere la causante y los hijos menores de 25 años de edad, o discapacitados de cualquier edad. Agrega que la Ley N° 19.880 incorporó al padre como beneficiario no solo cuando la madre faltare, sino también cuando ella haya dejado o dejare de percibir la pensión por renuncia o fallecimiento o incremento a un 40% el beneficio reparatorio para la madre o el padre de los hijos de filiación no matrimonial del causante. Apunta que la Ley N° 19.123 ha incorporado en el patrimonio de los familiares de las víctimas de derechos humanos los siguientes derechos: i) todos los familiares del causante tendrán el derecho de recibir de manera gratuita las prestaciones médicas incluidas en el régimen general de garantías de salud y las derivadas de embarazos; ii) beneficios educacionales, así los hijos de los causantes que sean alumnos de Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica sin aporte fiscal y reconocidos por el Ministerio de Educación, tendrán un derecho al pago de la matrícula y del total del arancel mensual de cada establecimiento. Señala que esta beca se encuentra normada por la Ley N° 19.123 y está destinada a los hijos de las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política de acuerdo a lo establecido por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, hasta los 35 años de edad. En lo relativo a las reparaciones simbólicas, sostiene que al igual que en todos los procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Indica que en esta compleja tarea de

entregar una compensación satisfactiva, política que también responde a las exigencias internacionales, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del Memorial del cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. c) La construcción del Museo de la memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los Derechos Humanos tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Asevera que tanto las indemnizaciones como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación podrían compensar precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto al punto. Señala que dicho tribunal, en sentencia de casación de fecha 23 de noviembre de 2015, confirmó la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de la Ley 19.123 y 19.992. Expresa que tal incompatibilidad no sólo ha sido reconocida por Tribunales Nacionales sino que también en el ámbito internacional, como la Corte Interamericana de Justicia, la que ha valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Concluye que estando entonces la acción alegada en estos autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias a las que tienen derecho los actores ya enunciadas, es que opone la excepción de reparación satisfactiva.

2) En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones civiles de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda. Expresa que según lo expuesto en la demanda los hechos delictuales que motivan la acción se habrían verificado en el mes de

junio de 1983 y es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 28 de agosto del año 2018, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil. En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones civiles que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil. Indica que en todo caso, en el evento que a la fecha de los hechos, los demandantes, hubiere sido menores de edad, y atento a lo prevenido en el inciso segundo del artículo 2520 del Código Civil, en el hipotético caso que hubiere mediado suspensión de la prescripción alegada, el plazo de 10 años que contempla esa norma, cualquiera sea la fecha de inicio de su cómputo y hasta la fecha de notificación de la demanda, también ha transcurrido en exceso, incluso si se considera que en ese entonces la mayoría de edad era a los 21 años. Luego indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita. Refiere que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado, entre estas norma cita el artículo 2497 de dicho cuerpo normativo. Asegura que toda acción patrimonial crediticia – como la de autos- se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. Enseguida, señala que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida, citando al respecto jurisprudencia sobre la materia. Más adelante, en relación con las alegaciones expuestas en la demanda, indica que ninguno de los instrumentos internacionales contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles

derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia, no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sin que el Tribunal pueda apartarse del mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

3) En subsidio, alega que debe regularse el monto de la indemnización asumiendo la premisa indiscutida que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/ o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización. Y conforme al principio de la extensión del daño, considera que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia.

TRIGESIMO NOVENO: Que la parte demandante en apoyo a su pretensión, acompañó un informe psicológico de doña María Alejandra Lazcano Campos, suscrito por don Freddy Silva Gallardo, psicólogo, coordinador del equipo especializado del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) del Servicio de Salud del Aconcagua, de 10 de agosto de 2018, el que se encuentra agregado de fojas 925 a 927. Señala que de acuerdo a lo vivido por la familia y relatado por la señora María, se puede inferir que ella a raíz del hecho traumático vivido a causa de la desaparición de su hermano, el reconocimiento de este como figura de relevancia en su vida, han sido determinantes en el daño de carácter permanente y de carácter crónico, ocasionando en ella dificultades para establecer relaciones interpersonales maduras y sanas, la confianza básica, el autocuidado de sí misma y la elaboración de procesos que le permita resignificar lo sucedido.

Asimismo mediante oficio se obtuvo a fojas 822, documento emanado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristinas sobre secuelas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, documentos elaborados por los profesionales del Programa Médico Psiquiátrico de la FASIC, quienes atendían a las

familias de las víctimas. Igualmente a fojas 858 se agregó respuesta a oficio emanada del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, de 20 de agosto de 2018, sobre secuelas en el plazo de salud mental de los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar. También a fojas 871 se responde oficio, agregando norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990, remitida por el Subsecretario de Redes Asistenciales. A fojas 1057 se agrega informe de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, adjuntando el documento “La desaparición forzada de personas: una forma de tortura de sus familiares”, elaborado por la Directora de la Corporación, Dra. María Paz Rojas Baeza y finalmente a fojas 1071 se agrega informe de la Organización No Gubernamental de Desarrollo, Corporación de Salud Mental y Derechos Humanos.

CUADRAGESIMO: Que asimismo la parte demandante rinde prueba testimonial durante el término probatorio del plenario. Así a fojas 1041, comparece Jessica Isabel Gallardo, quien expone que conoce a la demandante desde el año 1989 ya que ella tuvo que llegar a vivir al campamento donde ella vivía, la conoció porque su pareja era arenero, trabajaba en el río y él la ubicaba a ella y fue a conversar con ella para ver la posibilidad de instalar una media agua; ella sabía porque le contó que su hermano estaba desaparecido y que ella había ido a carabineros a dejar constancia por presunta desgracia, que pasaron los días sin tener respuesta y ellos la mandaron a Investigaciones y de ahí empezaron a ver que llegaban a la casa de ella la policía. Con respecto al daño moral que ha sufrido, es por años que se ha visto consumida por el alcohol y cada vez que tomaba ella lloraba, piensa que también le afectó con sus hijos porque cuando peleaba con ellos o con su pareja siempre le salía a relucir lo de su hermano, ya que dice que si su hermano estuviera vivo no estaría viviendo lo que vive ahora. A fojas 1042, declara como testigo Roxana del Carmen Vergara Maureira, quien señala que conoce a la actora desde toda la vida, ya que han sido vecinas en Los Andes, su estado anímico está por los suelos. Desde que tiene uso de razón le ha comentado y ha luchado por saber el paradero de su hermano, un tiempo se vio muy afectada que llegó a caer en el alcohol.

CUADRAGESIMO PRIMERO: Que con respecto a las argumentaciones planteadas por el Fisco, lo primero que plantea es la satisfacción reparativa que ha tenido la actora. Lo primero que debe consignarse es que la actora en tanto hermana de la víctima directa no ha percibido pensiones ni bonos ni ayudas económicas en virtud de las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874, según como consta en el documento de fojas 1105. 19.992 y 20.874. Si bien no se dice en forma expresa, el Fisco está señalando que existiría incompatibilidad entre ambas reparaciones –al menos la simbólica- en circunstancias que obedecen a dinámicas distintas, ya que las actuaciones realizadas por el Estado, se fundan en la calidad que los detenidos o exonerados por razones políticas, derivados de las listas que tanto la Comisión Valech o la Comisión de Reconciliación elaboraron en su oportunidad. La indemnización que en esta sede se pretende, se funda en el sufrimiento moral que afecta a la demandante a través de la actuación concreta de aquellas personas que cometieron el delito que aquí se genera y que confiere legitimidad en el plano civil, de cargo del Estado. A mayor abundamiento, la propia Ley 19.123, establece la compatibilidad de las indemnizaciones que aquí se discuten, entre las cuales se incluyen las simbólicas, las que claramente no tienen una característica monetaria. En virtud de todo ello, la pretensión del Fisco no será considerada.

CUADRAGESIMO SEGUNDO: Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva que también se plantea y que se funda en las normas del Código Civil que indica, debe tenerse presente que las acciones civiles entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República. A este respecto, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de

hacer cesar las consecuencias del agravio. A este respecto, al igual que en la materia penal correspondiente, tratándose en la especie de la comisión de delitos de lesa humanidad que genera la responsabilidad civil que se pretende, no es posible sostener la prescripción extintiva, ya que el paso del tiempo no tiene la facultad de interrumpir algún tipo de plazo, de cualquier naturaleza. Además, resulta bastante claro que si en la especie la situación de incertidumbre, falta de funcionamiento de los tribunales ordinarios de justicia y los estados excepcionales existente en el país, impedían que se pudiera demandar por cualquiera de las dos vías, esto es, lo penal y lo civil. Tampoco esas condiciones eran posibles a partir de la vuelta de la democracia, el año 1990, pues no existían los criterios jurisprudenciales que se fueron formando con los años, hasta arribar a la institución de los Ministros en Visitas Extraordinarias, que es lo que prima en este momento. Por lo demás, los criterios jurisprudenciales actuales determinan la improcedencia de que operen las normas de prescripción interna, tanto en materia penal como civil. En concreto, donde existe la misma razón debe primar la misma disposición, razones por las cuales se rechazará esta petición que formula el Fisco.

CUADRAGESIMO TERCERO: Que, conforme a la prueba testimonial rendida por la parte demandante, conteste y que han dado razón de sus dichos, a lo que se suma el cúmulo de antecedentes probatorios documentales antes referidos en el considerando trigésimo noveno que han permitido tener por establecido que los hechos delictivos que sufrió la víctima directa afectaron psicológicamente a su hermana, la demandante, de manera permanente, viéndose además privada de goces y disfrutes propios que genera la vida fraternal, considerando la edad que tenían estos hermanos al tiempo de comisión de los delitos. En virtud de todo ello y por existir un daño moral evidente que ha sufrido la demandante, se ordenará pagar la indemnización de perjuicios, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad de la aflicción psicológica causada, de carácter permanente y el cambio o modificaciones en sus condiciones de la vida que se han descrito, lo que permiten avaluar el daño extrapatrimonial en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

CUADRAGESIMO CUARTO: Que respecto al cobro de reajustes e intereses, cabe señalar que la valuación de los daños recién corresponde efectuarlos en esta sentencia y que es el momento en que se fija la suma de dinero que representa la cabal indemnización

que por los daños se reclaman, de forma tal que el reajuste sólo procede a contar del fallo mismo, y en cuanto a los intereses, ellos correrán desde la mora en el pago, si lo hubiere.

CUADRAGESIMO QUINTO: Que en lo tocante a las costas, se estima razonable eximir al Fisco de Chile de su pago, por tener motivo plausible para litigar.

En mérito de los expuesto, disposiciones legales que se han citado y atendido lo dispuesto en los artículos 1, 5, 11 N° 5, 14, 15, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 67, 68, 141, 150 y 320 del Código Penal; artículos 10, 42, 81, 108, 109, 110, 456 bis, 457, 484 bis, 481, 488, 500 y 533 del Código de Procedimiento Penal, **SE DECLARA:**

EN LO PENAL:

I.- Que no se hace lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción opuesta por la defensa la defensa de los acusados.

II.- Que se **CONDENA** al acusado **ANGEL NICANOR BUSTOS FARIAS** como autor del delito de secuestro con grave daño en la persona de José Lazcano Campos, ocurrido el día 5 de junio de 1983, a la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DIA** de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

III.- Que se **CONDENA** a los acusados **HERNAN ALEJANDRO DIAZ CARREÑO, LUIS PATRICIO PANTOJA CANALES, JORGE EDUARDO MANRIQUEZ FERNANDEZ Y PEDRO GUILLERMO LEVA DENEGRI** como encubridores del delito de secuestro con grave daño en la persona de José Lazcano Campos, ocurrido el día 5 de junio de 1983, a cada uno de ellos, a la pena de **TRES AÑOS Y UN DIA** de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

IV.- Que se **CONDENA** a los acusados **ANGEL NICANOR BUSTOS FARIAS, HERNAN ALEJANDRO DIAZ CARREÑO, LUIS PATRICIO PANTOJA CANALES, JORGE EDUARDO MANRIQUEZ FERNANDEZ Y PEDRO**

GUILLERMO LEVA DENEGRI, como autores del delito de inhumación ilegal en la persona de José Lazcano Campos, ocurrido entre el 5 y 6 de junio de 1983, a cada uno de ellos, a la pena de **SESENTA Y UN DIAS** de reclusión menor en su grado mínimo, una multa de seis unidades tributarias mensuales y accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

Si los sentenciados no tuvieran bienes para el pago de la multa impuesta, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal, en su oportunidad.

V.- Que el condenado Bustos Farías, atendida la magnitud de sus condenas, deberá cumplir efectivamente con sus condenas en los recintos penitenciarios correspondientes, sirviéndole en todo caso de abono el tiempo que permaneció privado de libertad en esta causa, esto es, entre el 26 y 28 de octubre de 2015, según consta del parte de Investigaciones de fojas 296 y certificación de fojas 321, respectivamente.

VI.- Que el condenado Leva Denegri, por no reunir los requisitos contemplados en la Ley 18.216, deberá cumplir efectivamente con sus condenas en los recintos penitenciarios correspondientes, sirviéndole en todo caso de abono el tiempo que permaneció privado de libertad en esta causa, esto es, entre el 26 y 28 de octubre de 2015, según consta de los partes de Investigaciones de fojas 291 y certificación de fojas 321, respectivamente.

VII.- Que los condenados Díaz Carreño, Pantoja Canales y Manríquez Fernández, por cumplir los requisitos legales establecidos en la Ley 18.216, se les concede el beneficio de Libertad Vigilada por el mismo término de las penas impuestas por cada delito objeto de la condena, sirviéndoles de abono, en caso de revocación, los lapsos consignados entre el 26 y 28 de octubre de 2015, según consta de los partes policiales de fojas 276 -respecto de Díaz-, de fojas 281 -respecto de Manríquez- y de fojas 286 –respecto de Pantoja- y las certificación de fojas 321 –respecto de los tres nombrados-.

EN LO CIVIL.-

VIII.- Que se hace lugar a la demanda civil interpuesta en el primer otrosí de la presentación de fojas 779 en representación de María Alejandra Lazcano Campos en contra del Fisco de Chile, debiendo pagarle este último por concepto de indemnización de

perjuicios por daño moral la suma de \$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos), suma que se reajustará conforme al alza de los precios al consumidor desde la fecha de esta sentencia hasta su entero pago y devengarán, en caso de mora, intereses corrientes para operaciones reajustables.

IX.- Que no se condena en costas al Fisco de Chile, por estimar que litigó con motivo plausible.

Notifíquese personalmente a los sentenciados y demás intervinientes en forma legal. Respecto a los apoderados de las partes, notifíqueseles en Secretaría o a través de Receptor de turno, cuando corresponda.

Dese cumplimiento en su oportunidad con lo dispuesto en el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y **CONSULTESE** si no se apelare.

Rol N° 22-2014.-

**DICTADA POR DON MAX CANCINO CANCINO, MINISTRO EN VISITA
 EXTRAORDINARIA PARA CONOCIMIENTO Y JUZGAMIENTO DE CAUSAS
 POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS**

En Valparaíso, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno, certifico que notifiqué la resolución que antecede, por medio del estado diario.